



**Global Health
Advocacy Incubator**

Changing Policies to Save Lives

Guía de acciones para la defensa legal

Estrategias jurídicas para la salud pública y la rendición de cuentas de la industria



Este documento se diseñó para ser complementado con la **Guía de acciones para la defensa** de GHAI.



Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

4

Evaluar

Agradecimientos

Esta guía fue elaborada principalmente por Kate Kanopka, directora legal de GHAI; Gianella Severini, coordinadora legal de GHAI, y Nayib Chalela, consultor legal de GHAI. Su redacción fue posible gracias a las contribuciones de María Lujan Abramo, Berta Bekele Deribe, Juan Carballo, Robert Eckford, Aaron Emmel, Aura Guerrero, Mikateko Mafuyeka, Rhia Muhi, Elinami Mungure, Daniel Ogunniyi, Jen Patterson, Verónica Poyano, Vandana Shah, Ranjit Singh, Patricia Sosa y Shani Winterstein.

Acerca de Global Health Advocacy Incubator

Global Health Advocacy Incubator (GHAI) reduce las muertes prevenibles y mejora la salud a gran escala mediante acciones de defensa que buscan cambiar las políticas y fortalecer los sistemas. Respalamos las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos de defensa que buscan que se aprueben políticas de salud pública destinadas a salvar vidas, reducir enfermedades, evitar lesiones, aumentar la inversión en salud pública y contribuir a un futuro más saludable y equitativo para todos. Para más información, visite la página www.advocacyincubator.org.

Copyright © 2025 Global Health Advocacy Incubator (GHAI), una iniciativa de la Campaign for Tobacco-Free Kids. Este documento puede publicarse, difundirse, compartirse y usarse solo con plena atribución a GHAI. El documento no puede modificarse, adaptarse ni alterarse de manera alguna sin el consentimiento de GHAI.

**Global Health
Advocacy Incubator**

Changing Policies to Save Lives



Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

4

Evaluar



Introducción

Las estrategias jurídicas son fundamentales para lograr resultados sostenibles en materia de salud pública. Estas estrategias deben aplicarse en todo el proceso de defensa para promover el cambio de políticas, responder a quienes se oponen a los logros en materia de salud pública y exigir rendición de cuentas a las industrias que perjudican la salud.

Esta guía, basada en la experiencia del Global Health Advocacy Incubator (GHAi) en diversos países y contextos, funciona como un manual práctico para que equipos jurídicos y las personas defensoras utilicen el poder de las leyes para respaldar sus objetivos de defensa y obtener mejores resultados en materia de salud pública. Brinda herramientas y métodos que permiten a los profesionales del derecho contribuir a la defensa de la salud pública y a la rendición de cuentas, además de identificar el cuerpo legal y posibles fuentes de apoyo para implementar estas estrategias.

Esta guía no es exhaustiva. GHAi desarrolla y mantiene otros recursos jurídicos que pueden ampliar y profundizar el campo de acción legal. Contáctenos para cualquier consulta o solicitud para obtener más información.

Esta guía es un complemento de la [Guía de acciones para la defensa de GHAi](#), un enfoque integral de la planificación y aplicación de la defensa. Esta guía se construye sobre esa base y se enfoca específicamente en el uso de herramientas y estrategias jurídicas para impulsar y proteger los cambios en políticas y la rendición de cuentas de la industria.

Esta guía muestra a la defensa cómo realizar las siguientes acciones:

- Analizar el contexto jurídico y político de la jurisdicción correspondiente para evaluar la viabilidad de distintas vías legales.
- Desarrollar leyes y normativas sólidas basadas en evidencia para mejorar los resultados en materia de salud pública.
- Implementar litigios estratégicos para promover y proteger los objetivos de salud pública, y para exigir rendición de cuentas a las industrias que perjudican la salud.

Introducción

1

Analizar

PASO 1

Revisión jurídica

PASO 2

Identificar las figuras clave

PASO 3

Definir su objetivo

2

Redactar

PASO 1

Elegir un instrumento jurídico

PASO 2

Evaluar las prácticas y modelos

PASO 3

Recopilar evidencias

PASO 4

Usar un lenguaje eficaz

PASO 5

Colaborar

PASO 6

Control y aplicación

PASO 7

Minimizar los riesgos jurídicos

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

Cada componente complementa a otros, reforzándose y retroalimentándose mutuamente a lo largo del recorrido dinámico e interconectado de la defensa jurídica. Es importante destacar que estas estrategias no siempre se desarrollan secuencialmente. Las personas defensoras jurídicas deben revisar y actualizar periódicamente su análisis y estar abierto a redirigir sus acciones a medida que se alcanzan hitos o cambian los contextos legales o políticos.



Introducción

1

Analizar

PASO 1

Revisión jurídica

PASO 2

Identificar las figuras clave

PASO 3

Definir su objetivo

2

Redactar

3

Litigar

4

Evaluar

Capítulo 1

Analizar

Una acción jurídica eficaz requiere una comprensión exhaustiva de lo que es posible en el contexto en el que se trabaja. La guía de acciones para la defensa de GHAJ describe el proceso de análisis del contexto del país. Este capítulo profundiza y sirve como guía mediante una revisión jurídica exhaustiva y la identificación de las figuras clave para evaluar la viabilidad y eficacia de ciertas vías jurídicas.

Este análisis es clave para las acciones legales por las siguientes razones:

- Permite una **redacción jurídica** basada en el cuerpo legal más amplio de la jurisdicción, mantiene su coherencia y se sustenta en argumentos legales que resultan persuasivos para las figuras clave y quienes toman decisiones.
- Brinda una base y aportes fundamentales para el desarrollo de un **litigio estratégico** exitoso. El éxito del litigio aumenta considerablemente si se suma una comprensión profunda del sistema jurídico, sus personas actoras y sus marcos normativos.

¿Qué es un análisis jurídico y por qué es importante?

Un análisis jurídico superpone una revisión exhaustiva del panorama legal de una jurisdicción, incluidas las leyes de fondo y de procedimiento, con la identificación de las figuras clave para evaluar las estrategias legales más viables y eficaces que deben implementarse para lograr los objetivos en materia de salud pública.

PASO 1

Revisión jurídica

Un análisis jurídico exhaustivo de la legislación, la normativa y la jurisprudencia pertinentes, incluidas las leyes nacionales e internacionales, constituye una base esencial para las acciones legales. Es necesario tener en cuenta las leyes que abarcan cuestiones de salud pública similares, así como otros instrumentos que contemplan derechos humanos y constitucionales que pueden respaldar los objetivos en materia de salud pública, y las leyes y normas de procedimiento que brindan el vehículo para acceder a la información y a las autoridades administrativas y judiciales.

La revisión jurídica debe incluir los siguientes elementos:

- Instrumentos jurídicos nacionales e internacionales vigentes
- Precedentes judiciales
- Políticas
- Compromisos relevantes para el problema de salud tanto a nivel nacional como a nivel regional

Introducción

1

Analizar

PASO 1

Revisión jurídica

PASO 2

Identificar las figuras clave

PASO 3

Definir su objetivo

2

Redactar

3

Litigar

4

Evaluar

Considere cómo se adoptan, aplican y se hacen cumplir las leyes y normas. El análisis debe establecer claramente la jerarquía jurídica entre las leyes, las normas y las disposiciones jurídicas. Por ejemplo, la constitución de un país puede ser la ley suprema, lo que significa que la legislación debe ser coherente con las disposiciones constitucionales. A su vez, las disposiciones regulatorias suelen ser coherentes con la legislación que interpretan.

Además, es necesario tener en cuenta la jerarquía entre los tribunales. Por ejemplo, la resolución de un tribunal suele prevalecer sobre la de un organismo administrativo.

ESTUDIO DE CASO: COLOMBIA

El caso de Colombia en contra de la Ley de Conflicto de Intereses y Transparencia: La comprensión de las leyes de transparencia les permite a las personas defensoras solicitar a los organismos gubernamentales información que es clave para establecer objetivos e iniciar acciones legales. Las solicitudes de información pueden revelar el proceso de toma de decisiones, las principales figuras clave y los casos de interferencia de la industria, incluidas las donaciones a las campañas de las personas legisladoras.

En Colombia, una organización de la sociedad civil (OSC), el **«Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo»** (CAJAR), impugnó ante la Corte Constitucional una ley que debilitaba los requisitos sobre los conflictos de intereses para el Congreso, al permitir que las personas legisladoras voten leyes que pudieran beneficiar a entidades que financiaban sus campañas. La evidencia de este caso, obtenida mediante solicitudes de acceso a la información, incluía evidencias de que tres personas legisladoras habían votado a favor de retrasar la aplicación de políticas alimentarias tras haber recibido contribuciones de campaña de empresas de alimentos pocos saludables.

En septiembre de 2021, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la ley impugnada. La Corte consideró que la ley socavaba los principios constitucionales al permitir que los miembros del Congreso actúen a favor de financiadores privados, en contra de su deber de servir al Estado, a la comunidad y al público en general. La Corte también concluyó que la disposición no cumplía con el principio de transparencia, ya que permitía a los miembros del Congreso actuar a pesar de tener claros conflictos de intereses. Tras tomar esta decisión, las personas legisladoras podrían enfrentarse a una demanda para ser destituidas de su cargo si no declaran un conflicto de intereses.

De acuerdo con esta sentencia, el CAJAR se aseguró de que los procesos legislativos cuenten con protecciones más sólidas contra las interferencias de la industria, para así garantizar una mayor transparencia y permitir la rápida identificación de los intereses de las empresas y de las personas legisladoras.

Este caso ilustra cómo las leyes de transparencia y conflicto de intereses pueden influir directamente en las estrategias de defensa. Además, pone de relieve cómo los profesionales del derecho pueden utilizar las leyes de transparencia para identificar y desarrollar litigios para impugnar leyes y normativas que debilitan las protecciones contra la interferencia de la industria y ponen en riesgo la integridad del proceso de elaboración de políticas.



Introducción

1

Analizar

PASO 1

Revisión jurídica

PASO 2

Identificar las figuras clave

PASO 3

Definir su objetivo

2

Redactar

3

Litigar

4

Evaluar

Elementos de una revisión jurídica

- **Leyes vigentes:** La revisión debe identificar las leyes pertinentes relevantes con el asunto de salud pública y tener en cuenta cómo afectan al tema en cuestión o no lo abordan. Los profesionales del derecho deben clasificar las leyes identificadas de acuerdo con su jerarquía en el sistema jurídico y deben identificar las leyes que determinan las vías legislativas y reglamentarias y los requisitos para acceder a los distintos tribunales. Por último, la revisión debe incluir las leyes de gobernanza que regulan la transparencia y la responsabilidad del gobierno y las empresas, incluido el acceso a la información.
- **Normas procesales y de acceso:** Deben analizarse las normas procesales para comprender los procesos de adopción de leyes y normativas, de obtención de acceso a la información y de impugnación de medidas gubernamentales o privadas que obstaculicen el cambio de políticas y salud pública. Este análisis debe incluir a todos los organismos y agencias gubernamentales pertinentes que participan en la aprobación, aplicación o modificación de leyes o propuestas políticas, incluido quién puede participar en estos procesos, en qué medida son transparentes y públicos, y cómo pueden participar las personas defensoras e influir eficazmente sobre ellos. Identifique los plazos y oportunidades relevantes para que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) contribuyan a las consultas públicas, incluida la redacción de propuestas, la presentación de documentos o evidencias de apoyo y la impugnación de procedimientos inadecuados o incompletos.
- **Proyectos de ley pendientes:** La revisión debe incluir los proyectos de ley o normativas pendientes relevantes y su estado en el proceso de implementación. Este aspecto de la revisión identifica los esfuerzos en curso para regular la cuestión de la salud pública y analiza si los proyectos de ley son la mejor práctica para abordar la cuestión o requieren modificaciones. Además, la revisión de los proyectos de ley o normativas pendientes puede revelar la existencia de organizaciones afines, la interferencia de la industria y los responsables de la toma de decisiones tanto las personas defensoras como las opositoras.
- **Políticas gubernamentales no obligatorias:** Estas medidas voluntarias pueden reflejar la posición o la agenda del gobierno actual y evidenciar la interferencia de la industria, dado que suele favorecer las políticas voluntarias y de autorregulación. Estas políticas pueden utilizarse para apoyar y justificar instrumentos legales de mejores prácticas que aborden el problema de salud pública.
- **Leyes y normativas internacionales:** Si las leyes internacionales, incluidos los tratados o las normas, se han incorporado a la legislación o a las autoridades nacionales, pueden obligar a un gobierno a brindar ciertas protecciones sanitarias y de otro tipo. En este sentido, las leyes internacionales pueden servir como base jurídica adicional para obligar al cambio, la aplicación y el cumplimiento de las políticas.
- **Instrumentos y declaraciones de soft law (derecho blando):** Los instrumentos y las declaraciones de soft law (derecho blando) de los órganos de interpretación, como los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, pueden aportar comentarios persuasivos sobre las obligaciones impuestas a un país concreto.
- **Mecanismos de aplicación y cumplimiento:** Los mecanismos de aplicación y cumplimiento vigentes podrían aplicarse a la política propuesta. La revisión debe identificar si las leyes existentes proporcionan poder regulatorio a cualquier ministerio u organismo para promulgar, aplicar, supervisar y hacer cumplir las medidas tanto a nivel nacional como local. Esto incluye los mecanismos de aplicación y cumplimiento en otras áreas que podrían repercutir o trasladarse a la cuestión sanitaria pertinente. Por ejemplo, las leyes de protección al consumidor suelen proporcionar un derecho de acción privado mediante el cual la sociedad civil puede exigir el acceso a información veraz y completa sobre las repercusiones de los productos sobre la salud.

Introducción

1

Analizar

PASO 1

Revisión jurídica

PASO 2

Identificar las figuras clave

PASO 3

Definir su objetivo

2

Redactar

3

Litigar

4

Evaluar

- **Decisiones judiciales y administrativas:** Estas decisiones brindan una interpretación poderosa y precedentes sobre cómo deben interpretarse las leyes y normativas a la hora de abordar casos concretos de infracciones o daños. La mayoría de los países tienen bases de datos o sitios web gubernamentales en los que la legislación, las normativas y las decisiones judiciales están a disposición del público. Si una jurisdicción no cuenta con dicho recurso, las personas actoras locales, como las OSC o la comunidad académica, pueden ayudar a reunir la información necesaria. Estas organizaciones pueden desarrollar y mantener sistemas de seguimiento de las leyes, normativas y decisiones pertinentes. El GHAI también tiene bases de datos y compendios que pueden ser de utilidad en una revisión.
 - **Autoridad judicial:** Es necesario un análisis de la autoridad judicial, incluida la capacidad del tribunal para hacer cumplir las medidas de aplicación y abordar los reclamos de violaciones de derechos o casos de incumplimiento. Parte de este análisis requiere considerar quién está legitimado para presentar una demanda por falta de aplicación, incumplimiento o violación de derechos, así como la ley que establece la causa de acción en estos casos, ya sea la constitución, una ley, una norma de revisión judicial o una incorporación de derechos humanos internacionales.
- **Jurisprudencia en otros países:** Esto puede ser valioso para brindar argumentos persuasivos. Identifique a las personas juzgadoras que deciden para revelar cualquier patrón en las decisiones y anote los argumentos que determinados tribunales consideran persuasivos, ya que esto informará sobre posibles estrategias de litigio.

El GHAI tiene una gran cantidad de bases de datos y documentos de recursos, que reflejan las mejores prácticas y las lecciones aprendidas en distintos países en relación con diversas cuestiones de salud pública. Se puede acceder a ellos [aquí](#).

ESTUDIO DE CASO: BARBADOS

Uso del Examen Periódico Universal para impulsar políticas en Barbados: El Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) es una plataforma para promover políticas que protejan el derecho a la salud. La sociedad civil puede participar en este proceso mediante la presentación formal de un informe sombra al CDHNU si un gobierno no cumple con sus obligaciones de promover o proteger la salud pública al no aprobar, aplicar o hacer cumplir políticas adecuadas.

En 2023, la Healthy Caribbean Coalition (HCC) y sus socios presentaron un Informe sombra al CDHNU sobre la violación del derecho a la salud por parte de Barbados al no regular medidas para prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil. Además, el informe exponía la falta de disposiciones para impedir la interferencia de la industria en la formulación de políticas de salud pública. Al enmarcar la cuestión en el lenguaje de los derechos humanos y vincularla a las obligaciones internacionales de Barbados, las personas defensoras lograron llevar con éxito el debate a un foro internacional, haciendo hincapié en la necesidad de proteger la salud de los productos nocivos y de la influencia empresarial. Pudieron utilizar ese compromiso internacional en sus esfuerzos de defensa nacional.



Introducción

1

Analizar

PASO 1

Revisión jurídica

PASO 2

Identificar las figuras clave

PASO 3

Definir su objetivo

2

Redactar

3

Litigar

4

Evaluar

PASO 2

Identificación de las figuras clave

La identificación de las figuras clave utiliza un análisis sistemático del panorama político para identificar las figuras clave fundamentales, las dinámicas de poder, los procesos de toma de decisiones y los posibles aliados u detractores. La [Guía de acciones para la defensa](#) de GHAI describe cómo identificar las figuras clave e incluye un modelo para este fin. En general, esta identificación utiliza la revisión de documentos y las entrevistas para identificar a aquellas personas con poder de decisión, sus posiciones previas y declaraciones públicas, otras organizaciones de la sociedad civil que pueden ser aliadas o competidoras para atraer la atención de quienes elaboran las políticas, y las posiciones de la industria que pueden interferir en el proceso político.

La identificación de las figuras clave brinda las siguientes cuestiones:

- ❑ **Compromiso estratégico:** Identifica los momentos estratégicos y los métodos para involucrar a las personas responsables de la toma de decisiones o a las personas defensoras, garantizando intervenciones oportunas y centradas.
- ❑ **Conocimiento de las personas actoras clave:** Brinda información sobre las personas responsables de la toma de decisiones y otras figuras clave, incluido su nivel y sector de influencia. La identificación de posibles personas defensoras es esencial para desarrollar alianzas poderosas y avanzar en el cambio de políticas.
- ❑ **Adopción y aplicación de políticas:** Identifica los organismos gubernamentales relevantes responsables de adoptar, aplicar y hacer cumplir las leyes y los métodos para hacerlo, garantizando políticas eficaces y sostenidas que tengan repercusión en los resultados sanitarios.
- ❑ **Fortalecimiento de la capacidad:** Evalúa las carencias de la capacidad dentro de las comunidades jurídicas y políticas, lo que permite que las personas activistas se dirijan a determinadas figuras clave para formarse e intercambiar información que garantice la disponibilidad de los conocimientos, habilidades y recursos adecuados.
- ❑ **Anticipación de la oposición:** Identifica a las personas actoras y puntos de vista de la oposición, lo que permite obtener una mejor preparación para reforzar las estrategias.
- ❑ **Obtención de evidencias:** Ayuda a las personas defensoras a identificar las evidencias que necesitan para convencer a las personas legisladoras relevantes sobre la importancia del cambio de política.
- ❑ **Objetivos políticos claros:** A través de este análisis, las personas defensoras pueden desarrollar, perfeccionar y ajustar sus objetivos de defensa, para evaluar su viabilidad y determinar las vías más eficaces para alcanzarlos.

Un análisis completo superpone los resultados de la revisión jurídica con la identificación de las figuras clave para revelar las estrategias jurídicas más viables y eficaces, así como a quién y cómo dirigir las para obtener el máximo efecto. Este análisis les permite a las personas defensoras definir y aplicar estrategias jurídicas que respondan a los desafíos y oportunidades específicos de su contexto.

Este análisis es un proceso continuo. Los profesionales del derecho deben actualizarlo y modificarlo regularmente para reflejar el estado actual de la legislación, el entorno político y las figuras clave, con el objetivo de informar la campaña de defensa y las estrategias jurídicas.

1

Introducción

1

Analizar

PASO 1

Revisión jurídica

PASO 2

Identificar las figuras clave

PASO 3

Definir su objetivo

2

Redactar

3

Litigar

4

Evaluar

PASO 3

Definir su objetivo

El análisis debe servir como guía para lograr la estrategia legal más viable. Una vez definido, este análisis orientará las actividades que debe realizar y la colaboración que puede necesitarse de personas expertas en comunicación, investigación y otras áreas. Establecer esto les brindará a las personas defensoras una dirección clara y permite evaluar mejor el progreso hacia el cambio político o los objetivos de rendición de cuentas de la industria.

Ejemplo:

Las personas defensoras buscan imponer fuertes restricciones a la publicidad de alimentos ultraprocesados. El análisis demuestra que la industria influye sobre las agencias ejecutivas relevantes y no favorecen al objetivo, pero se identificaron varias personas defensoras en el poder legislativo.

De acuerdo con este análisis, la estrategia legal más viable es redactar un proyecto de ley. La estrategia incluye:

- Colaborar con personas expertas en comunicación y las personas defensoras políticas para aumentar el apoyo público a la ley y educar a las figuras clave sobre las mejores prácticas y aprovechar el apoyo de las personas defensoras identificadas.
- Compartir información sobre las normas de mejores prácticas regionales y mundiales con las figuras clave.

El análisis que realizó en el primer capítulo le servirá de base para sus actividades, ya que demostrará las vías jurídicas más viables y eficaces. Tal como sucede con la defensa, las estrategias jurídicas suelen ser intrínsecamente oportunistas, requieren flexibilidad y pueden evolucionar con el tiempo en respuesta a contextos cambiantes y oportunidades emergentes.

Una estrategia jurídica necesitará de cierto grado de flexibilidad y una revisión constante para responder a un entorno cambiante. Esto puede requerir múltiples repeticiones y cambios para llevar adelante estrategias jurídicas que sean eficaces y estén sincronizadas con el objetivo general de mejorar la salud pública.

Por ejemplo, una estrategia de litigación puede estar atrás de varios casos de prueba diferentes para evaluar las personas demandantes, objetivos, causas de acción y argumentos jurídicos ideales. Incluso puede ser necesario explorar diferentes jurisdicciones y tribunales para obtener el precedente legal necesario que documente el engaño de las industrias que dañan la salud o para generar apoyo hacia un derecho implícito a la salud. La combinación ideal de factores para promover mejor los objetivos de salud pública no siempre está clara al principio de la defensa y evolucionará con el tiempo.

Introducción

1

Analizar

PASO 1

Revisión jurídica

PASO 2

Identificar las figuras clave

PASO 3

Definir su objetivo

2

Redactar

3

Litigar

4

Evaluar

GUIA DE PASOS Analizar

- ❑ **Realizar la revisión jurídica:** Identifique y analice las leyes, normativas y otros instrumentos relevantes, incluidas las disposiciones constitucionales, las leyes, las normas administrativas y los compromisos jurídicos internacionales. Incluya las leyes y normas de procedimiento que dictan el acceso a los órganos de ejecución, las personas legisladoras y la información. Revise los precedentes administrativos y judiciales que puedan obligar o persuadir a las personas legisladoras y tribunales en relación con la interpretación de los derechos constitucionales, las leyes y las normas.
- ❑ **Identificar las principales figuras clave:** Identifique a las personas responsables de la toma de decisiones, las posibles personas defensoras, las personas aliadas, las personas opositoras y las personas influyentes que pueden impulsar o bloquear los objetivos políticos. Incluya el clima político actual, las estructuras gubernamentales, los calendarios electorales y otros factores que pueden afectar a la vía política.
- ❑ **Identificar los vacíos legales y los obstáculos:** Señale las incoherencias, contradicciones o normativas que falten.
- ❑ **Examinar los mecanismos de aplicación:** Evalúe cómo se aplican, hacen cumplir y supervisan las políticas y leyes actuales, e identifique los vacíos que puedan obstaculizar el cumplimiento efectivo o los mecanismos que puedan traducirse en nuevas leyes y reglamentos.
- ❑ **Analizar los esfuerzos de las reformas anteriores:** Revise las reformas legales anteriores o en curso para identificar las lecciones aprendidas, los obstáculos afrontados y las estrategias exitosas.
- ❑ **Comprender las tácticas de la oposición:** Identifique las posibles interferencias de la industria, la influencia de las empresas y otras estrategias de oposición para contrarrestar sus esfuerzos de forma proactiva.
- ❑ **Identificar la estrategia jurídica más relevante:** Utilice el análisis legal para articular las acciones gubernamentales deseadas. Describa las acciones de defensa legal que ayudarán a alcanzarlas. Revise, evalúe el entorno periódicamente y realice cambios en los objetivos y la estrategia según sea necesario.
- ❑ **Garantizar un seguimiento continuo:** Mantenga el dinamismo del análisis actualizando periódicamente las conclusiones, especialmente después de cambios políticos, normativos o precedentes legales.

1

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

PASO 1

Elegir un instrumento jurídico

PASO 2

Evaluar las prácticas y los modelos

PASO 3

Recopilar evidencias

PASO 4

Usar un lenguaje eficaz

PASO 5

Colaborar

PASO 6

Control y aplicación

PASO 7

Minimizar los riesgos jurídicos

3

Litigar

4

Evaluar

Capítulo 2

Redactar

Si su análisis demuestra la necesidad y la viabilidad de un cambio de política mediante una nueva ley, enmienda o reglamento, los profesionales del derecho deben tomar las medidas necesarias para garantizar que el proceso de redacción sea técnicamente sólido y se ajuste a las mejores prácticas.

La redacción eficaz de leyes y reglamentos de salud pública requiere que quienes redactan traduzcan los conocimientos adquiridos en el proceso de revisión jurídica e identificación de las figuras clave en instrumentos jurídicos sólidos.

Esto incluye las siguientes acciones:

- Elegir el mejor tipo de instrumento jurídico.
- Sacar provecho de las lecciones aprendidas y las mejores prácticas.
- Justificar la política con evidencias.
- Involucrar a las diferentes figuras clave.
- Incluir mecanismos de aplicación y cumplimiento.
- Minimizar los riesgos.

Una redacción jurídica sólida es una defensa fundamental contra la interferencia de la industria y otros opositores, como las impugnaciones constitucionales, las disputas comerciales y los cambios en la voluntad política. Las leyes mal redactadas corren el riesgo de ser anuladas, malinterpretadas, derogadas o inefectivas por los vacíos que surgen en su aplicación.



¿Qué es la redacción jurídica y por qué es importante?

La redacción jurídica consiste en redactar leyes, sean leyes, normas, enmiendas a leyes o a normas actuales u otras disposiciones o políticas jurídicas. Una redacción jurídica eficaz crea instrumentos claros y aplicables que abordan una cuestión específica y son legal y constitucionalmente sólidos. En el contexto de la salud pública, la redacción jurídica traduce las ideas de un proceso eficaz de análisis e identificación en textos jurídicos resistentes a los desafíos legales, las disputas comerciales y la interferencia de la industria.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

PASO 1

Elegir un instrumento jurídico

PASO 2

Evaluar las prácticas y los modelos

PASO 3

Recopilar evidencias

PASO 4

Usar un lenguaje eficaz

PASO 5

Colaborar

PASO 6

Control y aplicación

PASO 7

Minimizar los riesgos jurídicos

3

Litigar

4

Evaluar

Una redacción jurídica eficaz requiere un profundo conocimiento del problema de salud pública, el marco jurídico actual y los resultados previstos. Implica anticiparse a los posibles obstáculos, como los vacíos en la aplicación, el escrutinio constitucional y la oposición política, e incorporar salvaguardias jurídicas para garantizar la durabilidad de la ley y su adaptabilidad a la evolución de las evidencias científicas y las necesidades de salud pública.

La redacción de instrumentos jurídicos de salud pública requiere el estudio de las prácticas anteriores y las lecciones aprendidas dentro de la propia jurisdicción y en todo el mundo. Lo que ha tenido éxito y lo que ha fracasado en el pasado puede informar sobre el mejor lenguaje y la mejor redacción, y señalar la necesidad de ciertas protecciones de procedimiento, aplicación y cumplimiento. Sin embargo, no se limite por las prácticas del pasado. La evolución de la ciencia y un clima jurídico y político favorable pueden conducir al desarrollo de la próxima «modelo de referencia» en una política particular.

La redacción jurídica es un paso fundamental para transformar las prioridades de salud pública en marcos jurídicos aplicables. Al fundamentar las leyes y los reglamentos en evidencias científicas, normas jurídicas internacionales y modelos comparativos, los profesionales del derecho pueden crear instrumentos que sean eficaces y resistentes.

Los instrumentos jurídicos bien redactados no solo facilitan la aplicación y el cumplimiento de las políticas, sino que también contribuyen a la estabilidad normativa a largo plazo y garantizan que las medidas de salud pública sigan siendo pertinentes a pesar de los cambios políticos.

El respaldo de GHAI a la redacción jurídica y los procedimientos legislativos

GHAI brinda asistencia a los gobiernos y a las OSC a lo largo de todo el proceso de redacción legislativa y normativa, garantizando que las leyes relacionadas con la salud pública sean técnicamente sólidas, jurídicamente defendibles y estratégicamente posicionadas para su adopción y aplicación. Este apoyo se adapta a las necesidades de cada jurisdicción y puede consistir en brindar documentos modelo o de ejemplo elaborados a partir del estudio de las mejores prácticas mundiales, revisar y perfeccionar los proyectos de ley y brindar orientación sobre los procedimientos legislativos y normativos para facilitar los procesos de promulgación.

Esta asistencia de personas expertas en redacción ayuda a garantizar que las leyes en materia de salud pública se sustenten en evidencias, sean coherentes con las mejores prácticas conocidas y estén en condiciones de ser promulgadas, aplicadas y ejecutadas con éxito.

GHAI y otras organizaciones y organismos internacionales también recopilan las mejores prácticas mundiales en modelos de leyes y normas que deberían brindar una hoja de ruta para el proceso de redacción y que tal vez solo requieran ajustes para el contexto específica de un país¹.

¹ Sitio web de GHAI y CTFK righttohealthpolicyhub.org, un repositorio de documentos de derechos humanos de los órganos internacionales creados en virtud de tratados de derechos humanos y mecanismos de las Naciones Unidas que apoyan el avance de las políticas de salud pública relacionadas con la alimentación, la nutrición y el control del tabaco. Sitio web de GHAI y O'Neill globalfoodlaws.georgetown.edu, una herramienta de descubrimiento de leyes y decisiones destinadas a reducir las enfermedades no transmisibles (ENT) relacionadas con la dieta. [Base de datos de los órganos de tratados de las Naciones Unidas](#)

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

PASO 1

Elegir un instrumento jurídico

PASO 2

Evaluar las prácticas y los modelos

PASO 3

Recopilar evidencias

PASO 4

Usar un lenguaje eficaz

PASO 5

Colaborar

PASO 6

Control y aplicación

PASO 7

Minimizar los riesgos jurídicos

3

Litigar

4

Evaluar



PASO 1

Elegir un instrumento jurídico

La revisión jurídica y la identificación de las figuras clave guiarán y orientará la elección del instrumento jurídico más factible y eficaz para abordar el problema en cuestión. Aunque dependen de cada jurisdicción específica, los instrumentos jurídicos generalmente pueden dividirse en leyes, normas y directrices políticas.

- **Las leyes** son promulgadas por el poder legislativo y prevén reformas sistémicas y estabilidad a largo plazo. Las leyes suelen ser más difíciles de cambiar y revocar que las normativas, pero pueden requerir más esfuerzo político y tiempo para dictarse. Además, las leyes pueden requerir reglamentación para ser operativas.
- **Las reglamentaciones** se dictan por las autoridades administrativas y son más adecuadas para aplicar aspectos técnicos o de procedimiento de las leyes y marcos jurídicos más amplios. Las reglamentaciones suelen emitirse más rápido, pero pueden ser menos estables, ya que pueden ser modificadas o derogadas por el ejecutivo sin apoyo del legislativo.
- **Las políticas o directivas** son instrumentos informales o no vinculantes que establecen directrices o principios de acción. Son útiles para iniciar debates, pero carecen de fuerza ejecutiva y requieren leyes o reglamentaciones para que sean efectivas.

La elección del instrumento legal es fundamental para lograr el resultado de salud pública deseado. Esta decisión varía de un país a otro y depende de múltiples factores, como el alcance de la cuestión, el marco legal actual, el nivel de detalle necesario y la viabilidad de una solución legislativa frente a una reglamentaria en el contexto de un país determinado (incluida la evaluación de personas defensoras y opositoras en los organismos legislativos y administrativos).

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

PASO 1

Elegir un instrumento jurídico

PASO 2

Evaluar las prácticas y los modelos

PASO 3

Recopilar evidencias

PASO 4

Usar un lenguaje eficaz

PASO 5

Colaborar

PASO 6

Control y aplicación

PASO 7

Minimizar los riesgos jurídicos

3

Litigar

4

Evaluar

Este cuadro detalla las principales diferencias entre las leyes y las reglamentaciones.

Cuadro 1. Descripción de leyes y reglamentaciones²

	LEYES/LEGISLACIÓN	REGLAMENTACIONES ³
Aspectos generales	Promulgadas por órganos legislativos, como el parlamento o el congreso, mediante un proceso formal (redacción, debate, enmienda, votación) que suele ser más largo y requiere muchos recursos, pero más difícil de modificar. Pueden ser leyes o decretos legislativos.	Son normas o directivas emitidas por órganos administrativos o ejecutivos para hacer operativa, aplicar y hacer cumplir la legislación en el ámbito de las competencias del organismo. Las reglamentaciones incluyen normas, resoluciones, circulares, decretos y ordenanzas según los contextos locales. Son más fáciles de aprobar, pero más fáciles de modificar o derogar por un próximo ejecutivo.
Alcance	En general, establecen principios, objetivos y disposiciones clave. Las leyes fijan los límites de las reglamentaciones y estas últimas no pueden contradecir esos límites ni sobrepasarlos.	Brindan detalles técnicos específicos, incluidos los procedimientos de aplicación y cumplimiento, pero deben ser coherentes con el contenido de la ley.
Participación	La legislación puede implicar procesos participativos, incluidas las reuniones con las personas legisladoras, pero estas deben ser <i>ad hoc</i> y estar sujetas a invitación. La impugnación puede limitarse a reclamos de inconstitucionalidad.	Suele haber un proceso de consulta pública y un periodo de comentarios establecidos por norma o ley y una vía directa para la impugnación legal cuando la normativa es incompatible con la ley vigente o excede la autoridad del organismo.

Aunque las diferencias entre leyes y reglamentaciones pueden hacer que una de ellas sea la mejor solución para un problema concreto, las barreras entre estos instrumentos pueden ser más difusas en algunas jurisdicciones. De esta forma, la elección puede depender de si el ejecutivo o el legislativo son actualmente más favorables a los objetivos de salud pública, qué rama del gobierno tiene más personas defensoras o cuál es más susceptible a la interferencia de la industria.⁴

2 Aunque las características de las leyes y las reglamentaciones suelen ser las mismas en todos los sistemas jurídicos, sus formas y su aplicación varían con frecuencia dependiendo de la tradición jurídica. En los países bajo el sistema de *Common Law*, las leyes —generalmente denominadas *statutes* suelen ser más breves, más amplias y de alcance más general. Esto se debe a que los sistemas de *Common Law* se basan en gran medida en los precedentes judiciales, y las personas juzgadoras desempeñan una función central en la interpretación de las leyes y completan los detalles mediante sus decisiones. Por el contrario, los países de derecho civil tienden a redactar leyes más largas y detalladas que abordan una amplia gama de aspectos y especificidades. Estas leyes están diseñadas para ser autónomas y minimizar la necesidad de interpretarlas judicialmente, y los precedentes judiciales cumplen principalmente una función interpretativa en lugar de proporcionar un contenido sustantivo vinculante a la ley. En consecuencia, las leyes de los países de derecho civil suelen incluir numerosos artículos para abarcar el mayor número posible de detalles para garantizar la claridad y exhaustividad del propio texto.

3 En muchos países, especialmente en los de habla hispana, el concepto de «reglamentaciones» se utiliza a menudo como un término amplio para referirse a los instrumentos jurídicos que abarcan las leyes promulgadas por el poder legislativo y las reglamentaciones dictadas por el poder ejecutivo.

4 [Public Health Law Center. Drafting Effective Policies.](#)

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

PASO 1

Elegir un instrumento jurídico

PASO 2

Evaluar las prácticas y los modelos

PASO 3

Recopilar evidencias

PASO 4

Usar un lenguaje eficaz

PASO 5

Colaborar

PASO 6

Control y aplicación

PASO 7

Minimizar los riesgos jurídicos

3

Litigar

4

Evaluar

PASO 2

Evaluar las prácticas pasadas y modelos actuales

Este paso requiere investigar cómo otras jurisdicciones han abordado cuestiones similares. Llevar adelante un análisis comparativo brinda información sobre enfoques exitosos, desafíos potenciales y lecciones aprendidas de otros países o regiones⁵.

El análisis debe abarcar leyes, reglamentaciones y políticas de jurisdicciones con sistemas jurídicos, condiciones socioeconómicas o problemas de salud pública similares. Una vez identificados los posibles modelos, el paso siguiente consiste en analizar sus puntos fuertes y débiles, incluidos los que hayan quedado demostrados por impugnaciones legales, decisiones judiciales o datos de aplicación, antes de adaptarlos al contexto de su país. Un modelo jurídico sólido debe tener mecanismos de aplicación claros y un impacto medible en la salud pública, mientras que los puntos débiles —como el lenguaje ambiguo o los vacíos de la industria— deben señalarse y corregirse.

Cualquier adaptación debe tener en cuenta los requisitos constitucionales, los factores culturales y los marcos jurídicos actuales, garantizando que la ley o la reglamentación propuestas sean viables y eficaces en el contexto jurídico y político del país. Copiar directamente modelos sin tener en cuenta la adaptación necesaria puede dar lugar a ineficiencias o consecuencias imprevistas.

Es importante analizar en profundidad los mensajes de las personas defensoras y opositoras, así como las impugnaciones legales al modelo o instrumentos jurídico análogo que se esté utilizando. Tenga en cuenta los argumentos utilizados por las personas litigantes y considerados persuasivos por los tribunales para dar forma a un instrumento jurídico más sólido y defendible.

ESTUDIO DE CASO: CHILE

Uso y adaptación del modelo chileno de ley de etiquetado de advertencia en el frente del envase (FOPWL): Muchos países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay, aprovecharon la experiencia de la primera ley chilena de etiquetado de advertencia en el frente del envase. Sin embargo, fue importante para aquellos países ajustar el modelo de Chile a sus propios entornos normativos y tener en cuenta los valiosos estudios e información revelados por el proceso inicial de Chile para adaptar las nociones de mejores prácticas.

Por ejemplo, en 2022, Argentina adoptó su FOPWL, seis años después que Chile. Esta brecha permitió que Argentina aprenda de la experiencia de Chile, en particular en lo que respecta a las tácticas de la industria y las mejores prácticas para la implementación. Argentina optó por utilizar el modelo de perfil de nutrientes (MPN) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para establecer los umbrales de activación de las advertencias, garantizando criterios de etiquetado más estrictos que los previstos por el MPN de Chile. La ley también estableció un periodo de cumplimiento de 180 días para evitar retrasos excesivos en la aplicación, una experiencia adoptada del enfoque de aplicación gradual de Chile. El estudio de las repercusiones de la ley chilena también reveló que la industria reformulaba a menudo sus productos con edulcorantes no azucarados (ENA) para evitar una advertencia por exceso de azúcar. Los ENA no son recomendables para los niños y pueden tener consecuencias negativas para la salud. Por eso, Argentina incluyó una advertencia para estos edulcorantes.

⁵ En la [Base de datos mundial sobre la aplicación de medidas nutricionales \(GINA\)](#) de la OMS figura una recopilación de [normativas sobre etiquetado frontal de envases \(FOPL\)](#) y una comparación de la legislación de los distintos países.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

PASO 1

Elegir un instrumento jurídico

PASO 2

Evaluar las prácticas y los modelos

PASO 3

Recopilar evidencias

PASO 4

Usar un lenguaje eficaz

PASO 5

Colaborar

PASO 6

Control y aplicación

PASO 7

Minimizar los riesgos jurídicos

3

Litigar

4

Evaluar

PASO 3

Recopilar evidencias

Las mejores prácticas actuales deben informar las políticas de salud pública. Los estudios revisados por personas expertas no deben tener conflicto de intereses. Los datos estadísticos y los análisis económicos deben justificar la necesidad de la política y demostrar su impacto potencial. Las evidencias no solo refuerzan la legitimidad de la medida, sino que también ayudan a defenderla frente a impugnaciones en los tribunales.

Muchos gobiernos solicitarán o incluso exigirán evidencias locales que respalden la existencia del problema de salud y la probable eficacia de la intervención jurídica concreta sugerida. Aunque las evidencias locales son convincentes y deben utilizarse, si es posible, a menudo no están disponibles o no tienen el grado de solidez exigido por los gobiernos. En ese caso, pueden ser pertinentes las evidencias regionales y mundiales que respalden la necesidad y la eficacia probable de la intervención jurídica sugerida.

Investigación y apoyo de GHAI a las experiencias internacionales en políticas de salud pública

El GHAI aprovecha su experiencia mundial para apoyar a los gobiernos y a las OSC en el desarrollo de políticas de salud pública basadas en evidencias. De acuerdo con su propia investigación, en amplias bases de datos jurídicas y en años de colaboración directa con las personas tomadores de decisiones, el GHAI ofrece una visión detallada de la forma en que diversos países han abordado retos sanitarios similares. Al evaluar tanto las políticas que han tenido éxito como las que no, el GHAI puede ayudar a identificar experiencias que pueden traducirse eficazmente para apoyar el cambio de políticas en otros contextos jurídicos y políticos, y evitar a su vez enfoques que demostraron ser contraproducentes.

Además, las asociaciones del GHAI con organizaciones internacionales, como la OMS o el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), le permiten acceder y sintetizar un vasto conjunto de recursos mundiales en materia de salud pública. Dada la complejidad de los marcos jurídicos y políticos internacionales, el GHAI recopila directrices y experiencias pertinentes para ayudar a los gobiernos y a las OSC a alinear las nuevas políticas con las prácticas mundiales, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad para la aplicación local⁶.

⁶ Consulte nuestros recursos sobre [Factores jurídicos clave para el desarrollo del FOPL](#) y las [Consideraciones jurídicas clave para elaborar la normativa sobre grasas trans](#)

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

PASO 1

Elegir un instrumento jurídico

PASO 2

Evaluar las prácticas y los modelos

PASO 3

Recopilar evidencias

PASO 4

Usar un lenguaje eficaz

PASO 5

Colaborar

PASO 6

Control y aplicación

PASO 7

Minimizar los riesgos jurídicos

3

Litigar

4

Evaluar

PASO 4

Usar un lenguaje eficaz

Los instrumentos jurídicos deben utilizar un lenguaje claro y sin ambigüedades, adaptado a los objetivos políticos y al tipo de instrumento jurídico. Las leyes tienden a articular principios y salvaguardias más amplios, mientras que los reglamentos articulan más específicamente las definiciones operativas y los mecanismos para aplicar los requisitos de la ley. De esta forma, la eficacia de una ley puede depender de su amplitud y de su capacidad para abarcar una amplia gama de intervenciones con el fin de abordar adecuadamente un problema de salud pública, mientras que un reglamento puede ser más eficaz si establece claramente un conjunto limitado de actividades y mecanismos operativos. Dado que los reglamentos suelen ser más fáciles de modificar, sus requisitos más estrictos y específicos pueden adaptarse a medida que cambian los conocimientos científicos o la comprensión de las mejores prácticas, o a medida que el progreso proporciona un conjunto diferente de necesidades. También es importante evitar un lenguaje que se preste a múltiples significados, utilizando varios términos para referirse a lo mismo o definiendo los términos de varias maneras en diversos instrumentos jurídicos. Estos errores pueden crear ambigüedad y vacíos que pueden obstaculizar una aplicación y cumplimiento sólidos.

Un uso eficaz del lenguaje minimiza el riesgo de interpretaciones erróneas, garantiza una aplicación eficaz, proporciona una vía clara para el cumplimiento y reduce al mínimo la posibilidad de impugnaciones legales.

Algunas consideraciones clave de las disposiciones o tipos de lenguaje para tener en cuenta:

- 1. Ámbito de aplicación:** Delimitar claramente los límites demográficos o situacionales dentro de los cuales se aplica el instrumento.
- 2. Definiciones:** Considerar la posibilidad de incluir un glosario de términos en el instrumento jurídico para evitar ambigüedades y reducir el margen de interpretación. Por ejemplo, qué se entiende por conceptos clave como «productos ultraprocesados» o «marketing digital». Además, es importante asegurarse de que los términos clave se definan de forma coherente en todos los instrumentos jurídicos. Si se basa en significados comunes de los términos, es importante elegir palabras y conceptos con un único significado en lugar de aquellos con múltiples interpretaciones.
- 3. Uso del lenguaje claro:** Los instrumentos jurídicos deben priorizar la claridad y la sencillez para minimizar las interpretaciones erróneas y garantizar que las disposiciones sean comprensibles y aplicables. Debe evitarse la jerga jurídica técnica, a menos que se requieran términos jurídicos específicos y se entiendan comúnmente en la jurisdicción.

PASO 5

Colaborar

La colaboración con diversas figuras clave es fundamental para garantizar la viabilidad, la aplicabilidad y la legitimidad del instrumento jurídico. Las figuras clave pueden ser las personas tomadores de decisiones, organismos de ejecución, OSC, personas expertas y comunidades directamente afectadas por el problema de salud pública. La incorporación de diversos puntos de vista —especialmente los de grupos infrarrepresentados— fomenta la inclusión y refuerza la credibilidad de la política.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

PASO 1

Elegir un instrumento jurídico

PASO 2

Evaluar las prácticas y los modelos

PASO 3

Recopilar evidencias

PASO 4

Usar un lenguaje eficaz

PASO 5

Colaborar

PASO 6

Control y aplicación

PASO 7

Minimizar los riesgos jurídicos

3

Litigar

4

Evaluar

Los problemas de salud pública son complejos y multifacéticos y a menudo requieren soluciones que abarcan múltiples disciplinas. La redacción de instrumentos jurídicos para abordar estas cuestiones suele requerir que los profesionales del derecho busquen e incorporen conocimientos de diversas disciplinas, como la nutrición, la medicina, la economía, las ciencias ambientales y la sociología, para garantizar que las políticas se basen en evidencias, sean integrales, eficaces y aplicables. Un enfoque multidisciplinario de la redacción jurídica refuerza la base científica de la política, mejora su defensa jurídica y garantiza su viabilidad en la aplicación en el mundo real.

ESTUDIO DE CASO: BRASIL

Un enfoque multidisciplinario de los impuestos sobre el azúcar en Brasil: En 2024, Brasil aprobó una ley histórica complementaria a su reforma fiscal integral. La reforma introdujo un impuesto especial sobre los productos perjudiciales para la salud y el medio ambiente. La ley complementaria especificaba que las bebidas azucaradas, el tabaco y el alcohol estarían sujetos a este impuesto. Los socios locales, liderados por ACT, desempeñaron un papel fundamental en la defensa de esta reforma.

La ley estableció una tasa sin impuestos para la canasta básica de alimentos compuesta principalmente por alimentos frescos y mínimamente procesados. Estableció una tasa impositiva reducida para otros productos esenciales, como jugos frescos, productos lácteos, salsa de tomate, pan de molde, pasta fresca y determinadas harinas y aceites. Todos los demás productos alimenticios, principalmente los ultraprocesados, están sujetos a una tasa impositiva del 28 %.

Este logro exigió que los profesionales del derecho redactaran estratégicamente la ley para garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, mitigando al mismo tiempo los posibles problemas jurídicos y ajustando la ley a las normas procesales locales. El esfuerzo exigió que los profesionales del derecho colaboraran con profesionales de múltiples sectores:

- Investigadores y profesionales de la salud pública aportaron evidencias sobre las repercusiones sanitarias del consumo de alimentos poco saludables, en particular de productos ultraprocesados, garantizando que la política se basara en la prevención de enfermedades y los beneficios para la salud de la población.
- Los economistas modelaron los efectos fiscales de las medidas y diseñaron una estructura impositiva que desincentivara el consumo excesivo de productos nocivos al mismo tiempo que genere ingresos públicos y hace más asequibles los alimentos saludables.
- Las OSC y los grupos de defensa desempeñaron un papel crucial en la amplificación de diversas perspectivas, la participación en el debate público y la garantía de que se escucharan múltiples voces —incluida la de los consumidores, personas defensoras de la salud pública y personas expertas en sistemas alimentarios— en los espacios clave de toma de decisiones.

Este enfoque multidisciplinario fue esencial para dar forma a una política fiscal sólida y eficaz que promueve la salud pública, la sostenibilidad económica y la resiliencia jurídica, al tiempo que minimiza las ineficiencias o los resultados no deseados perjudiciales.



Introducción

1

Analizar

2

Redactar

PASO 1

Elegir un instrumento jurídico

PASO 2

Evaluar las prácticas y los modelos

PASO 3

Recopilar evidencias

PASO 4

Usar un lenguaje eficaz

PASO 5

Colaborar

PASO 6

Control y aplicación

PASO 7

Minimizar los riesgos jurídicos

3

Litigar

4

Evaluar

PASO 6

Adoptar mecanismos sólidos de control y aplicación

Los instrumentos jurídicos requieren la asignación de la infraestructura, los recursos y la autoridad necesarios para ejecutar la ley, así como mecanismos sólidos para la detección de infracciones e incumplimientos. La ley también debe prever sanciones o penalizaciones para fomentar el cumplimiento y disuadir las conductas indebidas. Como mínimo, la aplicación y el cumplimiento requieren los siguientes elementos:

1. **Poder regulatorio/de aplicación:** La delegación de poderes normativos apropiados y autoridades a los organismos designados responsables de la aplicación y el cumplimiento.
2. **Mecanismos de control:** El establecimiento de procedimientos y protocolos claros para la supervisión del cumplimiento, la presentación de informes y la adopción de medidas correctivas.
3. **Mecanismos de revisión:** La inclusión de disposiciones en el instrumento jurídico que permitan a las personas tomadores de decisiones llevar a cabo evaluaciones periódicas para valorar la eficacia del instrumento y realizar los ajustes necesarios.
4. **Sanciones:** La previsión de sanciones, penas u otras medidas coercitivas aplicables en caso de incumplimiento o infracción que promuevan la adhesión. La previsión de un derecho de acción privado que permita a las OSC o a los particulares hacer cumplir la ley a los infractores puede ser un poderoso complemento de la aplicación gubernamental.
5. **Funciones y responsabilidades:** La identificación y asignación de las personas actoras que serán responsables de supervisar la aplicación y el cumplimiento de la política. Esto también implica dejar en claro las funciones, las responsabilidades y los mecanismos de coordinación entre los organismos o las autoridades pertinentes para facilitar la colaboración y la sinergia.

ESTUDIO DE CASO: ARGENTINA

Designación de autoridad cuestionable en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable de Argentina:

La Ley de Promoción de Alimentación Saludable de Argentina designa al poder ejecutivo como autoridad encargada de hacer cumplir las restricciones a la publicidad previstas en la ley. El ejecutivo delegó esta responsabilidad en el Ministerio de Salud. Sin embargo, las personas defensoras expresaron su preocupación por la falta de experiencia del Ministerio en el análisis y el tratamiento de las prácticas de publicidad, en particular en el contexto de la aplicación efectiva de dichas restricciones.

Las personas defensoras sostienen que la ley —o sus decretos reglamentarios—, deberían haber asignado explícitamente esta función de aplicación a una entidad del sector de las comunicaciones, que está mejor preparada para gestionar las complejidades de la normativa sobre publicidad. Debido a la falta de experiencia del Ministerio de Salud en materia de comunicaciones, no hubo una supervisión o aplicación eficaz de las sanciones relacionadas con las prácticas de marketing. Este desajuste representa una oportunidad perdida para garantizar una aplicación y un cumplimiento más firmes, lo que puede socavar la eficacia general de la ley a la hora de frenar las prácticas de publicidad de alimentos poco saludables y pone de manifiesto la importancia de una evaluación y una delegación de competencias meditadas en las leyes de salud pública.



Introducción

1

Analizar

2

Redactar

PASO 1

Elegir un instrumento jurídico

PASO 2

Evaluar las prácticas y los modelos

PASO 3

Recopilar evidencias

PASO 4

Usar un lenguaje eficaz

PASO 5

Colaborar

PASO 6

Control y aplicación

PASO 7

Minimizar los riesgos jurídicos

3

Litigar

4

Evaluar

PASO 7

Minimizar los riesgos jurídicos

El proceso de redacción debe incluir la evaluación de la susceptibilidad de la ley a la impugnación legal. Esto requiere garantizar que el proyecto sea coherente con la constitución, las leyes y la jurisprudencia de la jurisdicción, así como con cualquier instrumento internacional incorporado al marco jurídico nacional.

Las personas actoras de la industria y sus oponentes suelen recurrir a los litigios para intentar retrasar, debilitar o anular las medidas de salud pública y silenciar las campañas. Las personas defensoras deben anticiparse y contrarrestar los posibles argumentos contrarios con justificaciones claras, basadas en evidencias y con sustento jurídico.

1. **Cumplimiento constitucional:** Los instrumentos jurídicos de la salud pública deben ajustarse a la constitución de la jurisdicción. Las consideraciones clave son las siguientes:
 - a. **Derechos fundamentales:** Las intervenciones jurídicas propuestas deben equilibrar adecuadamente cualquier derecho constitucional en conflicto, como la libertad de expresión, la igualdad y el derecho a la salud. Por ejemplo, las restricciones a la publicidad de productos no saludables deben equilibrar los objetivos de salud pública con la protección constitucional de la expresión comercial. Esto suele necesitar demostrar que la política fomenta el objetivo de salud pública en cuestión, que alternativas menos restrictivas no podrían lograr el mismo resultado y que el beneficio global de la política supera el daño.
 - b. **Separación de poderes:** El organismo gubernamental que promulga el instrumento debe tener la autoridad legal para hacerlo. Los instrumentos jurídicos deben respetar la jerarquía de las leyes, lo que significa que las reglamentaciones deben ser coherentes con las leyes que aplican. En los sistemas federales, las leyes nacionales deben respetar la división de poderes entre los gobiernos nacionales y regionales.
2. **Obligaciones internacionales:** Las leyes de salud pública también deben ser coherentes con los instrumentos jurídicos internacionales que hayan sido ratificados e incorporados a los marcos jurídicos nacionales de la jurisdicción. Incluso si una jurisdicción no ha incorporado formalmente dicha legislación, la alineación puede mejorar la legitimidad de una política y su resistencia frente a los desafíos. Algunas consideraciones incluyen:
 - a. **Acuerdos comerciales internacionales:** Las medidas deben ser no discriminatorias, es decir, aplicarse por igual a entidades nacionales y extranjeras, y no ser más onerosas de lo necesario para alcanzar el objetivo de salud pública declarado. Los acuerdos específicos que hay que tener en cuenta y revisar son los siguientes:
 - **El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC):** Que regula el etiquetado de los productos.
 - **El Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF):** Que se aplica a las normas de salud y seguridad.
 - b. **Marcos de derechos humanos:** Como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que justifica las medidas de salud pública como parte del derecho a la salud.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

PASO 1

Elegir un instrumento jurídico

PASO 2

Evaluar las prácticas y los modelos

PASO 3

Recopilar evidencias

PASO 4

Usar un lenguaje eficaz

PASO 5

Colaborar

PASO 6

Control y aplicación

PASO 7

Minimizar los riesgos jurídicos

3

Litigar

4

Evaluar

- c. Compromisos de tratados vinculantes:** Como el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (CMCT OMS), que obliga a las partes a adoptar y aplicar medidas diseñadas a reducir y prevenir el consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al humo de tabaco mediante la prohibición del empaquetado y etiquetado engañoso, la creación de lugares libres de humo y la prohibición de la publicidad y la promoción, entre otras medidas.
- d. Directrices del soft law (derecho blando):** Incluidos los comentarios generales, los informes de relatores especiales y las decisiones judiciales internacionales para interpretar las obligaciones de los tratados y reforzar las justificaciones políticas.
- e. Acuerdos comerciales bilaterales:** Que pueden afectar la capacidad de una jurisdicción para promulgar leyes de salud pública. Los profesionales del derecho especializados en salud pública deberán evaluar la posibilidad de participar en estas negociaciones para garantizar que no se elimine la flexibilidad necesaria para proteger la salud pública.

GHAI brinda orientación sobre la aplicación de las obligaciones internacionales

Muchas áreas que regulan la salud pública se entrecruzan con tratados y acuerdos internacionales, incluidas las obligaciones comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos regionales de comercio y cooperación, los tratados de inversión y los marcos específicos de salud pública emitidos por Naciones Unidas. Comprender estas obligaciones es esencial para garantizar que las medidas de salud pública sean eficaces y cumplan las normas internacionales. Acceda a nuestra [Guía sobre el etiquetado en la parte frontal del envase: Preparación para los argumentos jurídicos del comercio internacional](#).

Por ejemplo, las industrias perjudiciales para la salud invocan con frecuencia los acuerdos comerciales y otros compromisos internacionales para impugnar o retrasar las medidas reglamentarias. De hecho, las obligaciones comerciales internacionales permiten específicamente ciertas restricciones que promueven iniciativas de salud pública. GHAI ayuda a los gobiernos y a las OSC a evaluar estos argumentos jurídicos, refutar las demandas de la industria y garantizar que las políticas de salud sean jurídicamente sólidas y defendibles.

Además, GHAI ofrece recomendaciones personalizadas sobre cómo alinear las políticas nacionales con las directrices sanitarias internacionales, garantizando que las leyes y las reglamentaciones integren las mejores prácticas mundiales con la adaptación local.

Entre las medidas legales adicionales que pueden utilizarse para reducir el riesgo de impugnaciones exitosas se incluyen las siguientes:

- 1. Mecanismos de transparencia:** Garantizar un proceso público abierto para evitar la influencia indebida de las personas actoras opositoras y adelantarse a las demandas de injusticia procesal.
- 2. Cláusulas interpretativas:** Incluir definiciones y declaraciones claras sobre la intención y el propósito de la política para garantizar que las disposiciones se interpretan en consonancia con los objetivos de salud pública, limitando el margen para interpretaciones erróneas impulsadas por la industria.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

PASO 1

Elegir un instrumento jurídico

PASO 2

Evaluar las prácticas y los modelos

PASO 3

Recopilar evidencias

PASO 4

Usar un lenguaje eficaz

PASO 5

Colaborar

PASO 6

Control y aplicación

PASO 7

Minimizar los riesgos jurídicos

3

Litigar

4

Evaluar

Impugnaciones comunes a las leyes de salud pública:

- 1. Política contra la pobreza:** Quienes se oponen a las leyes y reglamentaciones de salud pública suelen tildarlas de ser demasiado caras o de que aumentarán los costos para las personas con ingresos bajos. Para contrarrestarlo, quienes redactan deben incorporar evaluaciones de impacto económico que demuestren los beneficios para la salud pública, el ahorro de costos sanitarios y las ganancias económicas a largo plazo, como los ingresos fiscales que pueden destinarse a la sanidad o a subvenciones y el aumento de la productividad de la mano de obra. Además, deje en claro que los productos no saludables no son compras esenciales para las personas con bajos ingresos.
- 2. Política negativa para las empresas:** Las afirmaciones de que las leyes de salud pública afectarán negativamente a las empresas o reducirán la competitividad del mercado pueden contrarrestarse demostrando que las políticas se aplicarán de forma coherente y equitativa entre las empresas y que sus repercusiones en la salud pública superan cualquier impacto negativo marginal en las empresas privadas.
- 3. Libertad de expresión:** Las impugnaciones legales basadas en la libertad de expresión o los derechos de propiedad intelectual pueden contrarrestarse con el enorme beneficio para la salud pública frente al mínimo impacto sobre la expresión. Además, no existe protección para la expresión comercial desleal y engañosa.

ESTUDIO DE CASO: MÉXICO

Defensa de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla contra impugnación legal: En 2020, México consagró el derecho a una movilidad segura en su Constitución. Este derecho se reglamentó a través de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en 2022, que estableció normas nacionales para proteger a los usuarios vulnerables en la vía pública, prevenir lesiones de tránsito y mejorar la infraestructura vial. En 2023, el estado de Puebla aprobó su Ley de Movilidad y Seguridad Vial para armonizarla con el marco nacional.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) impugnó la ley de Puebla ante la Suprema Corte de Justicia de México y argumentó que las disposiciones que exigen un seguro obligatorio de responsabilidad civil y las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol violan los derechos constitucionales al afectar desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos e imponer sanciones excesivas.

Una alianza entre las OSC y familiares de víctimas, liderada por Céntrico, apoyó la defensa de la ley de Puebla mediante la presentación de un *amicus curiae*. El escrito demostró cómo la Ley de Movilidad y Seguridad Vial es coherente con la Constitución Mexicana, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y las mejores prácticas internacionales para proteger el derecho a la movilidad, la vida y la salud pública. El *amicus curiae* utilizó la prueba estándar de proporcionalidad constitucional para demostrar que el seguro obligatorio y las sanciones por beber alcohol eran constitucionales. El seguro obligatorio también brinda un mecanismo de respuesta para garantizar la asistencia médica a las víctimas de accidentes de tráfico, asegurando que ni sus derechos ni su estabilidad financiera se vean menoscabados. Por su parte, las sanciones estrictas por conducir bajo los efectos del alcohol pretenden disuadir de este comportamiento de alto riesgo y evitar lesiones graves y muertes por accidentes de tráfico.

Estas medidas se ajustan al derecho a la movilidad en condiciones seguras, en virtud del elevado número de muertes y lesiones graves relacionadas con el tráfico y de las estrategias basadas en evidencias para prevenirlas. En lugar de restringir la movilidad, estas disposiciones pretenden crear condiciones más seguras para todos.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

PASO 1

Elegir un instrumento jurídico

PASO 2

Evaluar las prácticas y los modelos

PASO 3

Recopilar evidencias

PASO 4

Usar un lenguaje eficaz

PASO 5

Colaborar

PASO 6

Control y aplicación

PASO 7

Minimizar los riesgos jurídicos

3

Litigar

4

Evaluar

GUIA DE PASOS Redacción jurídica

- ❑ **Elegir el instrumento jurídico adecuado:** Elija el instrumento jurídico que mejor aborde el problema identificado, proporcionando una base sólida para un cambio político significativo y sostenible.
- ❑ **Evaluar los modelos y precedentes jurídicos existentes:** Investigue leyes, reglamentaciones o políticas similares de otras jurisdicciones para identificar las mejores prácticas y evitar trampas, garantizando una adaptación eficaz al contexto local al tiempo que se anticipan posibles impugnaciones legales.
- ❑ **Fundamentar el proyecto en evidencias científicas y jurídicas:** Justifique la política con investigaciones revisadas por personas expertas, datos estadísticos y evaluaciones de impacto económico, reforzando su credibilidad y su defendibilidad jurídica.
- ❑ **Utilizar lenguaje jurídico eficaz:** Garantice que el instrumento jurídico sea claro, coherente y sin ambigüedades, evitando interpretaciones erróneas y cerrando lagunas que podrían debilitar su aplicación.
- ❑ **Colaborar con las figuras clave:** Considere un enfoque multidisciplinario. La participación de las personas tomadores de decisiones, las OSC, las personas expertas y las comunidades afectadas contribuye a garantizar que los instrumentos jurídicos sean prácticos, aplicables y legítimos.
- ❑ **Incluir mecanismos de supervisión y aplicación:** Defina estructuras de supervisión, requisitos de cumplimiento y sanciones por infracciones, garantizando que la política se aplica correctamente, se hace cumplir y se evalúa periódicamente.
- ❑ **Evaluar la vulnerabilidad jurídica y minimizar los riesgos:** Anticipe y haga frente a la oposición de la industria y las impugnaciones legales garantizando que el instrumento legal cumple con la legislación nacional e internacional y está justificado por los impactos económicos y de salud pública.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

Capítulo 3

Litigar

El litigio estratégico es una poderosa herramienta para proteger los objetivos de salud pública. Las políticas de salud pública suelen enfrentarse a la resistencia de la industria, a la inacción de los gobiernos o a las impugnaciones legales que amenazan su aplicación y eficacia. Además, las industrias nocivas para la salud han transferido durante años los costos humanos y planetarios de sus productos a gobiernos y particulares y deberían pagar por los daños que han causado. En estos casos, el litigio estratégico es una herramienta vital para proteger los objetivos de salud pública. El litigio estratégico puede utilizarse para los siguientes casos:

Separar la industria del gobierno

Obligar a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones

Defender a la sociedad civil y las políticas

Rendición de cuentas de la industria

Las personas defensoras pueden utilizar estrategias de litigio proactivo para obligar a los gobiernos a cumplir sus obligaciones constitucionales y de derechos humanos, desenmascarar el engaño de la industria, separar a las industrias perjudiciales para la salud de las personas tomadores de decisiones, demostrar la necesidad de regulación y hacer que estas industrias se responsabilicen por los daños a la salud y de otro tipo que ellas y sus productos causan. Los litigios pueden dar vida a una campaña de defensa al exponer el engaño y el daño de la industria y revelar la falta de respuesta o la negligente aplicación de la ley por parte del gobierno.

Además, las estrategias de litigación proactivas y defensivas son vitales para proteger a las personas defensoras y sus mensajes y acciones frente a los ataques de la industria o del gobierno que pretenden silenciarlas y neutralizarlas.

¿Qué es el litigio estratégico y por qué es importante?

El litigio estratégico es la aplicación deliberada del proceso legal para avanzar sobre los objetivos que van más allá de la disputa particular entre las personas demandantes del caso. El litigio estratégico utiliza el poder de los tribunales administrativos y judiciales para buscar la reforma sistémica o la reivindicación de derechos. Al impugnar la acción o inacción del gobierno y las prácticas perjudiciales de particulares o empresas, o al defender las políticas de salud pública y las OSC, el litigio estratégico puede aclarar y reforzar eficazmente los derechos fundamentales y la protección de la salud pública.

El litigio estratégico es también un poderoso instrumento de concienciación pública. Incluso en los casos en los que el objetivo de salud pública no se alcanza con la decisión del tribunal, el litigio puede aumentar la visibilidad, suscitar el debate social y generar presión sobre las personas tomadores de decisiones para que actúen. Los casos de gran repercusión pueden servir de catalizadores para una reforma más amplia, movilizándolo a la sociedad civil y reforzando los esfuerzos de promoción en los espacios legislativos y normativos. De este modo, los litigios pueden ser un componente esencial de una estrategia de defensa polifacética diseñada para promover el cambio sistémico y defender el derecho a la salud.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

Estrategias defensivas y afirmativas

El litigio estratégico puede ser defensivo o proactivo y se distingue por el papel que desempeñan las personas defensoras en el proceso. Las personas defensoras pueden intervenir para defender una política de salud pública frente a la impugnación de la industria o pueden encontrarse como persona demandada en una acción legal interpuesta por la industria basada en el uso o la exposición por parte de una campaña de comunicación de marcas de la industria y productos nocivos. De lo contrario, las personas defensoras pueden presentar una demanda contra el gobierno o contra agentes privados para impugnar acciones u omisiones que violen derechos constitucionales u otras leyes. Cualquiera de estas acciones, si se ejecuta estratégicamente, puede servir como una poderosa herramienta para proteger los derechos e impulsar el cambio sistémico.

Los litigios defensivos y proactivos pueden utilizarse como parte de una misma estrategia de defensa.

Por ejemplo, una estrategia de defensa podría comenzar con una demanda proactiva, ya sea contra el gobierno por no proteger adecuadamente la salud pública mediante la aplicación de etiquetado frontal de los envases (FOPL) en los alimentos poco saludables, o contra la industria por la publicidad engañosa de alimentos poco saludables para demostrar la necesidad de un contramensaje y una regulación eficaces.

Una vez promulgada la regulación de la FOPL, las OSC pueden tener que desplegar y apoyar litigios defensivos para proteger la regulación de los desafíos legales liderados por la industria. A continuación, las personas defensoras pueden tener que volver a las estrategias de litigio proactivo para denunciar el incumplimiento y hacer cumplir la normativa. Una defensa eficaz requiere la consideración de estrategias de litigio tanto defensivas como proactivas. Esto garantiza que las medidas de salud pública no solo se introduzcan, sino que también se apliquen, defiendan y hagan cumplir frente a la oposición empresarial y política.

Las decisiones judiciales y administrativas pueden sentar precedentes vinculantes o convincentes de que establezcan el derecho a la salud y el alcance de la obligación del gobierno de proteger los derechos. Estas decisiones también pueden disuadir a otras empresas perjudiciales para la salud de utilizar tácticas engañosas similares o de incurrir en conductas indebidas similares⁷. Estas sentencias pueden utilizarse eficazmente en campañas de comunicación, en la defensa ante las personas legisladoras y como autoridad persuasiva en otras jurisdicciones para motivar avances similares en materia de salud pública.

El litigio estratégico puede realizar las siguientes acciones⁸:

1. **Hacer valer los derechos:** Obligar a los gobiernos a cumplir sus obligaciones de proteger y promover los derechos a la salud o el acceso a la información.
2. **Proteger las políticas:** Defender las leyes y normativas sanitarias actuales frente a los desafíos que pretenden debilitarlas o anularlas.
3. **Aclarar leyes y protecciones:** Abordar las ambigüedades y vacíos en los marcos jurídicos o normativos para garantizar la máxima protección de la salud pública.
4. **Responsabilizar a las industrias perjudiciales para la salud:** Exponer y detener las acciones de la industria que interfieren con los derechos, hacerles pagar por los daños que causan y disuadirles de futuras conductas indebidas.

7 Los organismos administrativos suelen ser los responsables de aplicar y hacer cumplir la normativa de salud pública, y las normas de procedimiento pueden exigir que las personas demandantes soliciten reparación a la autoridad o tribunal administrativo antes de acudir a los tribunales. Los fueros administrativos pueden permitir a las personas defensoras solicitar la aplicación de la normativa por parte del gobierno en caso de incumplimiento o impugnar las decisiones de los organismos que socavan los objetivos de salud pública. Una vez agotados los recursos administrativos, las personas defensoras deben considerar las opciones judiciales para su caso. Para obtener más información, consulte el paso 4: Elección del fuero adecuado.

8 Open Societies Foundation. Advancing Public Health through Strategic Litigation Lessons from Five Countries (en inglés). Nueva York. Junio de 2016.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

5. Obtener información y evidencias esenciales: Obligar a los gobiernos a ser transparentes sobre sus procesos, acciones y compromisos con las figuras clave y obtener valiosos descubrimientos y revelaciones sobre el conocimiento y las acciones de la industria.

6. Establecer precedentes legales que hagan avanzar la legislación y las protecciones de salud pública en múltiples jurisdicciones: Las decisiones de los tribunales pueden adquirir fuerza vinculante para todas las autoridades o ser interpretaciones jurídicas en la jurisdicción y una fuerte autoridad persuasiva para otros países de la región y de todo el mundo.

El litigio estratégico puede combinarse con otras estrategias y actividades de promoción para maximizar los efectos de cada una de ellas. El litigio estratégico puede amplificarse a través de campañas en los medios de comunicación y funcionar en conjunto para sacar a la luz actos perjudiciales del gobierno o la industria. Además, el litigio puede estimular la concienciación y el compromiso de la comunidad e impulsar el cambio de políticas.⁹

El litigio estratégico puede servir de catalizador para las siguientes cuestiones¹⁰:

- ❑ **Fomentar la conciencia pública:** Los casos pueden dar visibilidad a los problemas de salud pública y obtener apoyo público para las personas defensoras y las OSC.
- ❑ **Presionar a las personas tomadores de decisiones:** La visibilidad de los litigios puede incitar a las autoridades legislativas o reguladoras a tomar medidas para resolver el problema sanitario, incluso antes de que se emita una sentencia judicial.
- ❑ **Abrir debates sociales:** Los casos relacionados con la salud pública suelen suscitar debates públicos sobre las responsabilidades del gobierno, la responsabilidad de las empresas y los derechos de las poblaciones afectadas. Esto tiene el potencial de dar prioridad a la cuestión para las personas tomadores de decisiones, así como de movilizar a la población para exigir las medidas necesarias para abordar el problema.
- ❑ **Habilitar el entorno para la elaboración de políticas libres de conflictos:** Las demandas de protección de los consumidores pueden sacar a la luz el marketing engañoso y otras conductas indebidas de los agentes de la industria privada, lo que hace menos aceptable que el gobierno entre en contacto con estos agentes y reduce su acceso a la mesa de formulación de políticas.

Emprender litigios estratégicos requiere una planificación y una ejecución meticulosas. Los equipos jurídicos deben determinar los objetivos inmediatos y a largo plazo del caso. Por ejemplo, un litigio puede tratar de hacer cumplir las leyes vigentes sobre restricciones publicitarias o establecer nuevas obligaciones para regular los productos nocivos. Los objetivos claros proporcionan una hoja de ruta para el proceso de litigio y garantizan que todas las figuras clave estén alineadas en sus esfuerzos.

Después, los equipos jurídicos deben decidir cuáles son las demandas adecuadas, reunir evidencias, seleccionar personas demandantes y objetivos estratégicos, elegir el foro jurídico apropiado, los recursos adecuados y elaborar una demanda sólida.

⁹ Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA): Kirichenko K. Jurisprudencia de los órganos de tratados de las Naciones Unidas sobre orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales: informe de políticas. Ginebra. Octubre de 2019; Equinet: Red Europea de Organismos de Igualdad (Equinet). Litigio estratégico, un manual de Equinet. 2017

¹⁰ Siempre es esencial mencionar que, si bien el litigio puede hacer avanzar la salud pública incluso si no tiene éxito, también puede envalentonar al gobierno y a la industria para continuar con una aplicación laxa o una mala conducta y crear una mala ley. Consulte el paso sobre cómo minimizar los riesgos legales.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

PASO 1

Elegir las demandas y anticipar los desafíos

Seleccionar el caso adecuado es el eje del litigio estratégico. Un caso bien elegido no solo abordará el problema sanitario específico, sino que también creará oportunidades para sentar precedentes jurídicos, influir en las políticas públicas y movilizar el apoyo público sobre el tema. Los equipos jurídicos deben considerar varios factores para determinar si el caso es adecuado para el litigio estratégico o no.

Los casos que se decida presentar dependen de las acciones constitucionales, legislativas y procesales en una jurisdicción concreta, del análisis jurídico de las evidencias requeridas para cada una y de la receptividad histórica del tribunal frente a casos relacionados. También es importante considerar los contraargumentos probables a tales demandas y qué tan persuasiva ha sido la oposición en casos similares. Los equipos jurídicos deben evaluar la solidez de su caso según argumentos contrarios probables y desarrollar argumentos de refutación sólidos.

Lo ideal es que el litigio estratégico no solo logre objetivos de salud pública inmediatos, sino que también contribuya a avances de salud pública a largo plazo. Sin embargo, es importante que los equipos jurídicos comprendan que los litigios también son intrínsecamente oportunistas, lo que significa que no siempre se presentará el caso emblemático perfecto. En cambio, lo que puede hacer que un litigio sea estratégico es su enfoque iterativo o secuencial de múltiples casos. Varias organizaciones de la sociedad civil en diferentes jurisdicciones podrían planificar la presentación de demandas similares contra un actor de la industria en un enfoque coordinado para maximizar el impacto de cada caso. Alternativamente, las personas defensoras pueden planear presentar una serie de casos más pequeños y menos emblemáticos que puedan capitalizarse entre sí para obtener el objetivo de defensa mediante la progresión o la suma de los resultados de los casos.

Las demandas que se presentan dependerán del objetivo de la defensa. Por ejemplo,

- **Separación del gobierno de la industria en ausencia de leyes claras sobre conflicto de intereses:** Considere la posibilidad de denunciar la publicidad engañosa de sus productos por parte de la industria para hacer menos aceptable que el gobierno interactúe y se deje influir por estas personas actoras corporativos.
- **Regulación gubernamental del etiquetado o publicidad:** Las acciones de protección de los consumidores podrían servir a este objetivo al exponer la necesidad de potentes contramensajes y regulación. Sin embargo, se podrían alegar violaciones constitucionales por parte de la agencia gubernamental pertinente por no proteger el derecho a la salud y a la información.
- **Exigir a los servicios de reparto de comida en moto que proporcionen cascos a sus trabajadores:** Considere si las leyes de seguridad de los trabajadores pueden ser lo suficientemente amplias como para abarcar este tipo de requisitos.

El estudio de las normas procesales de la jurisdicción y de casos anteriores debería proporcionar información clave sobre lo que cumplirá los requisitos y lo que un tribunal probablemente encontrará persuasivo. Aprovechar los precedentes y utilizar las sentencias nacionales e internacionales reforzará el caso.

Las revisiones jurídicas, como la del primer capítulo de esta guía, deberían señalar posibles cuerpos legales y causas de acción que las personas litigantes pueden utilizar para lograr avances en materia de salud pública. Piense con amplitud. Mientras que en algunas jurisdicciones se pueden interponer recursos constitucionales y de derechos humanos internacionales, en el contexto de otros países se pueden apoyar mejor otras causas de acción basadas en motivos legales o procesales.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

Los tipos de casos incluyen los siguientes:

1. **Impugnación de la inacción gubernamental:** Cuando los gobiernos no cumplen sus obligaciones de proteger la salud pública, los litigios pueden obligarlos a actuar. Esto suele implicar demostrar que la inacción del gobierno viola obligaciones constitucionales o internacionales, como el derecho a la salud. Los argumentos pueden ser los siguientes:
 - a. Destacar las obligaciones del gobierno en virtud del derecho constitucional e internacional;
 - b. Utilizar el testimonio de personas expertas para demostrar el impacto de la inacción en la salud pública.
 - c. Enmarcar el caso como una violación de derechos para reforzar el compromiso judicial.

ESTUDIO DE CASO: COLOMBIA

Demanda de inconstitucionalidad contra el Ministerio de Salud por no implementar FOPL en

Colombia: En 2019, Red PaPaz, una OSC colombiana dedicada a los derechos de la niñez, presentó una acción popular contra el Ministerio de Salud y otras agencias reguladoras por no implementar la FOPL en alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas. Al demostrar que los retrasos del gobierno violaban derechos fundamentales, Red PaPaz logró obligar a las autoridades a adoptar un sistema de FOPL con base científica. La sentencia sentó un precedente jurídico en el uso de los tribunales para obligar al gobierno a promulgar políticas de salud pública, reafirmando que el Estado tiene el deber de regular los entornos alimentarios en aras del interés público.

La demanda argumentaba que la ausencia de etiquetas de advertencia obligatorias vulneraba el derecho a la salud y el derecho de los consumidores a una información clara y veraz sobre los productos. El caso pretendía obligar al gobierno a dictar normativas basadas en evidencias e impedir la interferencia de la industria en el proceso regulador.

Red PaPaz argumentó que la inacción del gobierno contribuía directamente al aumento de las enfermedades relacionadas con la alimentación y que las agencias reguladoras habían incumplido su deber de adoptar medidas basadas en las mejores evidencias científicas disponibles. Además, Red PaPaz expuso la influencia de la industria en la formulación de políticas, demostró cómo los intereses empresariales habían retrasado y debilitado los esfuerzos reguladores y justificó aún más la necesidad de una intervención judicial.

El tribunal dictaminó que el Ministerio de Salud había incumplido sus obligaciones constitucionales al no aplicar un sistema de FOPL respaldado científicamente. El tribunal ordenó al Ministerio que emitiera una normativa que exigiera etiquetas de advertencia claras en todos los productos ultraprocesados con exceso de azúcar, sodio o grasas saturadas, así como edulcorantes artificiales. Es importante destacar que la sentencia ordenaba que la nueva normativa se basara en evidencias científicas independientes y libres de conflictos de intereses para garantizar que los grupos de presión de la industria no socavaran las medidas de salud pública. Aunque el tribunal no se pronunció explícitamente sobre la interferencia de la industria, su decisión anuló de hecho el anterior modelo de etiquetado del gobierno, respaldado por la industria.



Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

2. **Rendición de cuentas de las industrias:** Se pueden iniciar litigios contra empresas privadas para responsabilizarlas por los daños que causan y disuadirlas de futuras conductas indebidas. Estos casos suelen estar relacionados con las leyes de protección de los consumidores, pero puede haber demandas constitucionales en determinadas jurisdicciones que reconocen la obligación de los agentes privados de respetar los derechos fundamentales. Los argumentos pueden ser los siguientes:
 - a. La industria engañó a los consumidores con afirmaciones confusas sobre la salud o empleó estrategias publicitarias que dirigieron injustamente productos no saludables a la infancia.
 - b. La industria recopiló indebidamente datos sobre los consumidores para manipularlos y dirigirlos a la venta de productos no saludables.
 - c. La industria elevó el precio y redujo la disponibilidad de alimentos saludables mediante la consolidación de los supermercados y el cierre de tiendas, especialmente en zonas de bajos ingresos.
 - d. La industria diseñó productos para inducir el consumo excesivo y la adicción y no advirtió a los consumidores de estos peligros.
 - e. La industria violó el derecho a la salud y a la información al comercializar engañosamente productos no saludables.
 - f. La industria violó el derecho a la información al manipular y comprar investigaciones científicas sesgadas.

ESTUDIO DE CASO: BRASIL

Mead Johnson, Nestlé y Danone engañaron a los consumidores y promocionaron de forma cruzada preparados para lactantes y «leche para niños pequeños»:

La OSC brasileña, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), demandó a Mead Johnson, Nestlé y Danone por comercializar engañosamente «leche para niños pequeños», una bebida ultraprocesada que contiene azúcar agregada. IDEC alegó que las personas demandadas empleaban estrategias engañosas de promoción cruzada para confundir a los consumidores entre la leche para niños pequeños y los preparados para lactantes y para subvertir la normativa brasileña que protege la lactancia materna y la nutrición infantil.

IDEC recurrió estratégicamente a múltiples leyes, entre ellas la Ley brasileña de Normas de Comercialización de Alimentos para Lactantes y Primera Infancia, que restringe la promoción de preparados para lactantes, y el Código de Defensa del Consumidor (CDC) brasileño, que prohíbe la publicidad engañosa y protege el derecho del consumidor a una información precisa. Las protecciones constitucionales de la salud, los derechos del consumidor y el bienestar infantil también fueron fundamentales en los argumentos de IDEC. La demanda sostenía que las empresas utilizaban envases, marcas y posicionamiento similares en las tiendas de preparados para lactantes y «leche para niños pequeños», con el fin de difuminar las diferencias entre los productos, crear confusión entre los consumidores y violar las restricciones sobre la promoción de sustitutos de leche materna. IDEC alegó que estas tácticas fomentaban la desinformación y aumentaban los riesgos para la salud al desincentivar la lactancia materna.

Como parte de su estrategia jurídica, IDEC presentó una demanda de Asistencia Legal en el Extranjero (FLA) en Estados Unidos para obtener información valiosa de Mead Johnson & Co LLC, la empresa matriz estadounidense responsable de las políticas mundiales de nutrición. El tribunal estadounidense accedió a la solicitud de IDEC y obligó a Mead Johnson a revelar sus estrategias de marketing, tácticas de promoción cruzada, investigaciones internas sobre la confusión entre productos, quejas de las personas consumidoras y estudios sobre el impacto en la salud de los niños que consumen estos productos. El caso continúa. IDEC reclama 60 millones de reales (aproximadamente 10 millones de dólares) en concepto de daños colectivos y la prohibición total de envases engañosos similares a los perpetrados por las personas demandadas.



Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

3. **Abordar las fallas procesales:** Los litigios también pueden abordar fallas procesales, como la falta de transparencia o de consulta pública en la elaboración de políticas. Estos casos garantizan que los procesos de gobierno sean justos, inclusivos y se ajusten a las normas legales. Los argumentos jurídicos pueden incluir:
 - a. Los procesos gubernamentales deben detenerse o anularse a menos que se sigan los procedimientos adecuados y se informe de ello al tribunal.
 - b. Las personas legisladoras en desacuerdo deben abstenerse en determinadas votaciones y procesos.
 - c. La sociedad civil debe participar plenamente en el proceso de formulación de políticas.
 - d. Los gobiernos deben hacer pública la información sobre sus decisiones y sus influencias, incluidos los calendarios de reuniones con la industria y otras figuras clave.

ESTUDIO DE CASO: KENIA

Impugnación de la falta de participación pública en la formulación de políticas en Kenia: Los profesionales del derecho de interés público interpusieron una demanda contra el gobierno para impugnar las enmiendas a la Ley de Semillas y Variedades Vegetales. La ley exigía que las semillas estuvieran certificadas y registradas y penalizaba el intercambio de semillas no registradas. Estos cambios afectaban a los derechos de los agricultores y las comunidades indígenas, que tradicionalmente realizaban intercambios informales de semillas para promover la rotación de cultivos y la producción local eficaz de alimentos, pero también levantaban de facto una prohibición de las semillas y productos modificados genéticamente sin participación ni comentarios públicos. La acción legal atacaba la nueva norma tanto por motivos de derechos internacionales y constitucionales como por motivos de procedimiento, mediante el requisito de participación pública en tales cambios políticos. Las partes presentaron sus alegatos finales ante el tribunal el 15 de mayo de 2025, y se espera una sentencia en noviembre de 2025.



PASO 2

Recopilar evidencias

Los equipos jurídicos deben evaluar qué evidencias necesitarán para fundamentar sus demandas y demostrar la necesidad de la intervención judicial. Las evidencias necesarias dependen de las demandas. Además, los distintos sistemas jurídicos pueden exigir más o menos evidencias para iniciar el litigio y prever procesos más o menos sólidos de ofrecimiento de prueba durante el curso del litigio. Los tipos de prueba pueden ser las siguientes:

1. **Evidencias científicas:** Estudios que muestren la carga de enfermedades no transmisibles (ENT) y la conexión entre los impactos en la salud y las prácticas nocivas o las intervenciones legales.
2. **Análisis económicos:** Datos que destaquen la carga financiera de las fallas de la salud pública para las personas y los gobiernos, incluidos los gastos sanitarios y la pérdida de productividad laboral debido a enfermedades crónicas. Evidencias de las ganancias y los ingresos cosechados por las industrias perjudiciales para la salud.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

3. **Elementos probatorios de engaño:** Evidencias que apoyan la naturaleza falsa, ambigua o engañosa de las declaraciones y la publicidad de la industria, incluida la probabilidad de confusión del consumidor.
4. **Evidencias de incumplimiento:** Evidencias que demuestren el incumplimiento por parte de la industria de la legislación en materia de salud pública o la aplicación laxa de dicha legislación por parte del gobierno.
5. **Evidencias comparativas:** Estudios de casos de otras jurisdicciones que demuestren la eficacia de políticas o intervenciones similares.

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas adecuadas

Todas las estrategias de litigio proactivo requieren una evaluación estratégica de las demandas adecuadas, así como de las mejores personas demandantes para promover esas demandas y las mejores personas demandadas (en los litigios defensivos, estos son elegidos por otra persona).

Elegir a las personas demandantes adecuadas es crucial para el éxito del litigio. Por lo general, las personas demandantes requieren legitimación activa, es decir, que se vean directamente afectados por la acción u omisión de las personas demandadas. Sin embargo, en algunos casos, las normas procesales pueden permitir la legitimación de la organización, lo que significa que una OSC puede presentar un caso en interés público. Algunas jurisdicciones tienen normas de legitimación que amplían el grupo de posibles personas demandantes. Es importante investigar estas normas de procedimiento para asegurarse de que todos las personas demandantes consideradas cumplen los requisitos aplicables.

Las personas demandantes suelen ser la cara visible del caso y la persona representante del movimiento que busca un cambio sistémico. Por ello, su credibilidad, fiabilidad y cercanía son esenciales. Por ejemplo, una persona vulnerable o una comunidad desproporcionadamente afectada por el problema puede humanizar el caso y suscitar la simpatía del público. Sin embargo, las indiscreciones previas de una persona demandante pueden afectar negativamente a todo el caso. La asociación previa a una industria perjudicial para la salud, la exageración previa a la prensa o las afirmaciones previas engañosas a la prensa son ejemplos de este tipo de indiscreciones. Es importante indagar y considerar los antecedentes de cada persona demandante y realizar estratégicamente estas selecciones.

La elección de las personas demandadas es igualmente importante. Habrá casos en los que sea mejor actuar contra el gobierno porque su obligación de actuar es la más clara, y la acción obligada del gobierno cumplirá mejor su objetivo de defensa. En otros casos, su objetivo debe ser una persona actora de la industria privada que haya incumplido leyes o reglamentaciones o violado determinados derechos.

Para lograr la máxima exposición e impacto, puede resultar estratégico dirigirse a una gran empresa multinacional que domine el mercado. Sin embargo, estas empresas son también las que cuentan con más recursos, por lo que hay que plantearse si no sería más fácil enfrentarse a un objetivo más pequeño y seguir avanzando en el objetivo de la defensa. Las personas del derecho deben plantearse si presentan demandas contra una persona actora privada o contra varias. Cada enfoque tiene sus ventajas y sus desventajas. Enfrentarse a una única persona actora perjudicial permite que el caso tenga un tamaño más razonable y manejable, y puede resultar más rentable. Sin embargo, esto deja potencialmente libre el comportamiento de otras personas actoras perjudiciales. Por el contrario, la elección de ir contra múltiples empresas multinacionales puede abordar mejor la mala conducta, pero podría ser abrumador y requerir muchos recursos. En cualquier caso, será esencial tener en cuenta los objetivos que se señalan entre sí para desviar

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

la culpa. Asimismo, recuerde que el litigio estratégico está diseñado para tener repercusiones más allá de la persona demandada concreta elegida. Por lo tanto, considere si un caso más pequeño (contra una sola empresa) podría tener repercusiones más amplias (por ejemplo, una orden judicial contra determinados tipos de marketing que muchas personas actoras están perpetrando). Esta puede ser una forma de llevar a cabo un caso más manejable y rentable, pero conseguir un impacto más amplio.

ESTUDIO DE CASO: INDIA

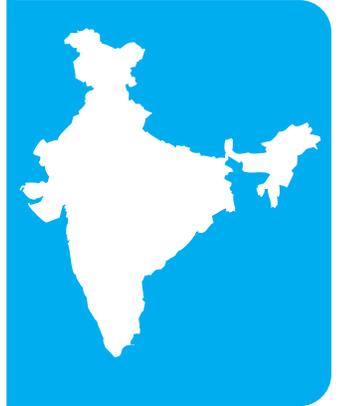
Selección estratégica de demandante y demandado en casos de protección de los consumidores en la

India: Las demandas de protección de los consumidores contra la industria en la India han desempeñado un papel crucial en el avance de la FOPL y el fortalecimiento de la normativa sobre etiquetado de alimentos. Las OSC y las personas defensoras de los consumidores han utilizado estratégicamente la Ley de Protección al Consumidor para impugnar las etiquetas y los anuncios engañosos de los alimentos y defender la necesidad de una normativa y unos contramensajes contundentes. Esta estrategia empleaba a compradores individuales como personas demandantes y se dirigía a una plétora de personas demandadas y productos específicos para las reclamaciones administrativas. El proceso era relativamente fácil y barato de ejecutar (las demandas se presentaban en línea a través del portal de la Autoridad de Protección al Consumidor), pero alcanzó un volumen crítico que atrajo la atención de los poderes ejecutivo y judicial.

Se presentó una denuncia ante la Autoridad de Protección al Consumidor contra Mondelez Internacional (Cadbury Bournvita) por afirmaciones publicitarias engañosas, entre ellas que el producto proporcionaba «Fuerza todos los días», «Fuerza física» y «Fuerza mental». La denuncia sostenía que estas afirmaciones no se basaban en evidencias y engañaban a los consumidores al afirmar falsamente beneficios para la salud y no revelar el alto contenido de azúcar del producto. Dado que Bournvita se comercializa principalmente entre los niños, el caso puso de relieve la urgente necesidad de un etiquetado transparente y advertencias claras sobre los productos con alto contenido de azúcar, sal y grasa.

Las personas defensoras buscaban tres formas de reparación: en primer lugar, la eliminación de las afirmaciones engañosas en Bournvita y productos similares; en segundo lugar, sanciones contra los fabricantes que hicieran publicidad engañosa; y en tercer lugar, una revisión normativa para reforzar las leyes de etiquetado y recomendar la adopción de la FOPL para los productos no saludables. Para reforzar sus argumentos, las personas activistas aplicaron una estrategia multicanal que incluía sensibilizar a los diputados y a los organismos reguladores, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la India (CNDH) y la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de la Infancia (NCPCR), para que apoyaran una normativa más estricta. Las personas defensoras también desplegaron esta estrategia para sacar a la luz las afirmaciones engañosas de otros productos a través de los medios de comunicación impresos, electrónicos y sociales mediante la presentación de nuevas denuncias contra estos fabricantes, lo que puso de relieve problemas sistémicos en las prácticas de etiquetado y publicidad de alimentos en la India.

Esta estrategia sacó a la luz vacíos críticos en la normativa india sobre etiquetado de alimentos, lo que suscitó demandas de reforma más amplias. Desde entonces, las asociaciones de consumidores y las personas defensoras de la salud han pedido que se eliminen las clasificaciones engañosas de «bebida saludable» para los productos con alto contenido en azúcar, que se revise el contenido de azúcar de los alimentos infantiles y las bebidas envasadas, que se refuerce la supervisión de la Autoridad de Protección del Consumidor sobre los anuncios de productos alimentarios y que se adopten las mejores prácticas mundiales para la FOPL, inspirándose en modelos de éxito como los de Chile y México.



Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

La selección de la jurisdicción adecuada es fundamental para maximizar el impacto de los litigios. Los equipos jurídicos deben evaluar las normas procesales de la jurisdicción, la independencia judicial y la receptividad a los casos de interés público. Por ejemplo, presentar un caso ante un tribunal constitucional puede poner de relieve los derechos fundamentales que están en juego, mientras que un litigio internacional puede atraer la atención mundial sobre el asunto (pero puede dar lugar a una decisión no vinculante e inaplicable).

Los profesionales del derecho deben tener en cuenta los tribunales administrativos y asegurarse de que se han agotado los recursos administrativos antes de presentar una demanda ante los tribunales. Los organismos administrativos suelen ser los responsables de aplicar y hacer cumplir la normativa de salud pública, y las normas de procedimiento pueden exigir que las personas demandantes soliciten reparación a la autoridad o tribunal administrativo antes de acudir a los tribunales. Las autoridades administrativas también pueden ser vías eficaces para exigirles a los gobiernos la aplicación de la normativa o para impugnar las decisiones de los organismos que socavan los objetivos de salud pública.

ESTUDIO DE CASO: COLOMBIA

Sanción exitosa por publicidad engañosa de la bebida azucarada «Hit» ante la autoridad administrativa:

En diciembre de 2017, Red PaPaz, una OSC colombiana dedicada a los derechos de la niñez, presentó una denuncia administrativa contra Postobón S.A., un importante productor de bebidas azucaradas, alegando que la empresa realizó una publicidad engañosa de sus bebidas azucaradas HIT. La demanda cuestionaba las afirmaciones engañosas que presentaban a HIT como «jugo», «fruta real» y «la mejor opción para la lonchera», creando una falsa impresión de su valor nutricional. Red PaPaz fundamentó su demanda en la Ley de Protección del Consumidor de Colombia, que prohíbe la publicidad engañosa y ofrece protección especial a los consumidores infantiles.

Los análisis de laboratorio revelaron que HIT solo contenía entre un 8 % y un 14 % de fruta, lo que contradice directamente sus afirmaciones comerciales. Además, la afirmación «me hace más fuerte» implicaba beneficios para la salud que carecían de evidencias científicas. De igual forma, ninguna prueba respaldaba que la HIT fuera «la mejor opción para la lonchera».

En 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa histórica de COP 1 660 000 000 (aproximadamente USD 383 000) a Postobón, confirmando que su publicidad era engañosa y reforzando la Ley de Protección al Consumidor de Colombia. Se rechazó la apelación de Postobón y el caso se consolidó como una decisión histórica. Esta decisión sentó un precedente importante para la publicidad veraz de alimentos, en particular para los productos destinados a los niños.

Las acciones ante los tribunales nacionales suelen ser la mejor opción para obtener un precedente jurídico vinculante y aplicable que haga avanzar los objetivos de salud pública. Sin embargo, los equipos jurídicos deben tener muy en cuenta las normas de procedimiento, los prejuicios judiciales o las influencias políticas que pueden afectar a la solidez y eficacia de una acción ante los tribunales nacionales. Algunos países



Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

cuentan con tribunales constitucionales específicos que se ocupan de las demandas relativas a la acción u omisión del gobierno que pueda violar los derechos constitucionales, o pueden obligar a las autoridades a aprobar, aplicar, reforzar o hacer cumplir normativas basadas en argumentos de derechos.

Cuando los recursos nacionales son insuficientes o no están disponibles, se puede recurrir a los mecanismos internacionales de derechos humanos para abordar los problemas de salud pública. Los organismos internacionales incluyen órganos judiciales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuasi judiciales, como los órganos de tratados de las Naciones Unidas. Los litigios internacionales pueden utilizarse para exigir responsabilidad a los Estados por incumplir obligaciones internacionales, como las consagradas en los tratados internacionales de derechos humanos. Estos fueros pueden interpretar el derecho a la salud de forma amplia, pero se ven obstaculizados por el hecho de que sus decisiones no suelen ser vinculantes ni ejecutables. Considere si una acción de este tipo podría utilizarse para estimular la acción nacional o para persuadir a los tribunales nacionales, aunque la decisión en sí carezca de fuerza ejecutoria.

PASO 5

Elegir el momento adecuado

El momento adecuado es un factor crucial para tener en cuenta. Los equipos jurídicos deben evaluar cuidadosamente el contexto jurídico, político y social para determinar el mejor momento para presentar una demanda. Como parte de este cálculo, los equipos deben considerar el tiempo necesario para reunir evidencias para el caso, consolidar alianzas y preparar la demanda.

Presentar una demanda en el momento adecuado puede maximizar su impacto. Las personas defensoras deben evaluar si el litigio coincide con los debates legislativos en curso, los cambios en la composición de la magistratura o la mayor concienciación pública sobre el problema. En algunos casos, la acción legal puede ser más eficaz cuando coincide con otros esfuerzos de defensa, como una campaña de comunicación o un examen internacional de derechos humanos que evalúe el cumplimiento por parte del gobierno de sus obligaciones en materia de salud pública. Un caso mal programado puede enfrentarse a la reticencia judicial, a una participación pública limitada o a un menor impulso de la defensa.

Es importante asegurarse de que el momento elegido para presentar el caso sea coherente con el objetivo de la defensa. Por ejemplo, si el litigio se diseñó para separar a la industria de la formulación de políticas gubernamentales, debe hacerse lo suficientemente pronto en la vía política para avanzar en la deliberación y el desarrollo sin conflictos.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar



PASO 6

Construir alianzas y obtener apoyos

El litigio estratégico se beneficia de alianzas sólidas, que incluyen a las personas litigantes experimentadas, las OSC, la comunidad académica, las personas expertas en salud pública y la comunidad en general. Estas asociaciones ofrecen recursos adicionales, conocimientos especializados y apoyo público, lo que aumenta el impacto del litigio.

Los casos de salud pública y derechos humanos requieren a menudo amplios conocimientos técnicos, recursos financieros y una defensa permanente, lo que puede resultar difícil para una sola entidad. Al obtener una alianza multidisciplinaria diversa, los litigios ganan en credibilidad, resistencia y repercusión. La difusión en los medios de comunicación puede amplificar aún más el caso, lo que garantiza que resuene entre el público y las personas tomadores de decisiones.

La creación de alianzas sólidas también puede proteger a las personas litigantes de las reacciones políticas y de la industria. La unión hace la fuerza, y una gran coalición puede aumentar el apoyo público y disuadir al gobierno y a la industria de tomar represalias contra las personas litigantes principales.

Una de las principales ventajas de las alianzas diversas es su capacidad para fortalecer los argumentos jurídicos y reforzar las demandas basadas en evidencias. En muchos casos, los desafíos jurídicos dependen de datos científicos, análisis económicos y normas jurídicas internacionales, que requieren el aporte de instituciones de investigación, personas expertas en políticas y especialistas en salud pública. Este enfoque multidisciplinario no solo refuerza la solidez del caso, sino que también persuade a los tribunales para que tengan en cuenta implicaciones más amplias para la salud pública.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

ESTUDIO DE CASO: MÉXICO

El despliegue de una alianza para defender la constitucionalidad del FOPWL de México: Con un fuerte apoyo de las OSC, México adoptó una sólida Ley de FOPWL en octubre de 2019, que prevé etiquetas de advertencia en alimentos y bebidas procesados, así como restricciones de publicidad. Tras la continua presión de los grupos de salud pública, el gobierno aprobó un reglamento promulgatorio en marzo de 2020, que entró en vigor en octubre de 2020.

La industria de alimentos y bebidas contraatacó rápidamente y presentó al menos 170 demandas, conocidas como amparos, en las que argumentaron que el reglamento era inconstitucional. Las empresas alegaron que el reglamento violaba sus libertades comerciales, la libre competencia, los principios de proporcionalidad y no discriminación.

La Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) falló en contra de estas demandas y confirmó la constitucionalidad del FOPWL. La decisión unánime (11-0) de la SCJN reafirmó que la protección de la salud pública está por encima de los intereses empresariales. La sentencia estableció que el FOPWL no viola las libertades comerciales porque las empresas siguen siendo libres de vender sus productos. Además, el Tribunal dictaminó que la normativa era proporcional y no discriminatoria, porque alternativas menos restrictivas no tendrían el mismo efecto y la normativa se aplicaba por igual a todos los productos preenvasados con altos niveles de azúcar, sodio y grasas saturadas. El Tribunal también subrayó que el FOPWL empodera a los consumidores al proporcionar advertencias claras y con base científica sobre los niveles excesivos de azúcar, grasa y sodio. Además, dictaminó que se protegen los derechos de la niñez mediante advertencias específicas sobre la cafeína y los edulcorantes artificiales, y se desalienta su consumo en menores. El Tribunal destacó que el FOPWL tiene fundamento científico y cumple las obligaciones constitucionales e internacionales de México en materia de derechos humanos.

Para lograr este resultado, la alianza de las OSC trabajó con personas expertas jurídicas y científicas para presentar un *amicus curiae* en apoyo de la validez constitucional de la normativa del FOPWL y destacar las evidencias científicas y los argumentos de derechos humanos. El GHAI también desempeñó un papel clave en el apoyo a las personas defensoras mexicanas porque presentó informes *amicus curiae* que hacían hincapié en la lógica de la salud pública y las mejores prácticas mundiales en torno a las etiquetas de advertencia. La planificación del litigio por parte de la alianza garantizó que los argumentos presentados por las distintas organizaciones se complementaran entre sí para lograr el máximo efecto. La alianza también divulgó en los medios de comunicación para fomentar la conciencia pública sobre los beneficios para la salud de la FOPWL y contrarrestar los argumentos de la industria que presentaban la ley como una medida contraria a la competencia.

Esta decisión supuso una importante victoria para los derechos de los consumidores y sentó un sólido precedente jurídico para normativas similares en toda América Latina. El caso también demostró el poder del litigio estratégico y de alianzas como Alianza por la Salud Alimentaria para defender las políticas de salud pública frente a la oposición de la industria.



Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

Más allá de los tribunales, las alianzas desempeñan un papel crucial en la participación pública y garantizan que los esfuerzos de litigación se vean respaldados por campañas en los medios de comunicación y movilizaciones de base. Una victoria legal, por sí sola, no siempre garantiza el cambio de políticas, especialmente si los gobiernos o las personas actoras de la industria se resisten a su aplicación. Al coordinar los litigios con otras estrategias, las alianzas pueden mantener la presión sobre los responsables de la toma de decisiones, garantizando que las victorias legales se traduzcan en un impacto en el mundo real.

Las alianzas también sirven como mecanismo de protección contra las represalias de la industria y los gobiernos. Los litigios en materia de salud pública desafían a menudo a poderosos intereses empresariales, que pueden responder con tácticas de intimidación jurídica, contrademandas o amenazas económicas contra las personas demandantes y los equipos jurídicos. Una alianza bien estructurada garantiza que ninguna entidad asuma todo el riesgo y brinda apoyo jurídico e institucional para resistir la presión política y de la industria. En algunos casos, las alianzas pueden coordinar los esfuerzos de litigación en múltiples jurisdicciones, ya sea coordinando múltiples demandas nacionales o utilizando organismos jurídicos regionales o internacionales para crear múltiples frentes para las personas demandadas y aumentar la rendición de cuentas.

ESTUDIO DE CASO: COLOMBIA

Defensa de los mensajes de salud pública de las OSC en Colombia: **Educación Consumidores**, una OSC colombiana de protección al consumidor, lanzó en 2016 una campaña de comunicación sobre salud pública en la que advertía de los riesgos para la salud de las bebidas azucaradas. La campaña ilustraba el contenido de azúcar de bebidas populares y relacionaba su consumo con problemas de salud. Postobón, un importante productor de bebidas azucaradas, presentó una demanda ante la SIC, argumentando que la campaña de Educación Consumidores era engañosa y carecía de evidencias suficientes. La SIC falló a favor de Postobón y ordenó a Educación Consumidores suspender la campaña. También exigió a la organización que presentara todas las campañas futuras sobre bebidas azucaradas a la SIC para su revisión y aprobación previas, advirtiéndole de que las infracciones podrían dar lugar a multas.

En respuesta a este fallo, múltiples OSC presentaron tutelas (acciones constitucionales), argumentando que la decisión de la SIC violaba el derecho de las OSC a la libertad de expresión y el derecho de los consumidores a la información. Ante la evidente trascendencia de estos casos, la Corte Constitucional colombiana ejerció su facultad discrecional de revisar estas tutelas. El tribunal dictaminó que la decisión de la SIC violaba tanto el derecho de los consumidores a recibir información como el derecho de Educación Consumidores a la libre expresión. Hizo hincapié en que el libre acceso a la información es fundamental en una democracia y en una economía de mercado. Si las empresas tienen derecho a promocionar sus productos, las organizaciones de la sociedad civil deben tener derecho a informar a los ciudadanos sobre los riesgos relacionados con esos productos. El Tribunal declaró además que las campañas de salud pública realizadas por organizaciones sin fines de lucro merecen una mayor protección constitucional que la publicidad comercial.

El apoyo de otras OSC a la campaña de Educación Consumidores y su posición en el caso de la SIC fortalecieron la defensa de Educación Consumidores y llamaron la atención sobre la ilegalidad de la decisión de la SIC. En última instancia, este precedente permitió a las OSC colombianas lanzar agresivas campañas de comunicación para denunciar la mala conducta de la industria y fomentar la conciencia pública sobre los problemas de salud pública.



Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

Para que las alianzas sean eficaces, deben asignarse funciones y responsabilidades claras a los participantes. Un compromiso temprano promueve esta asignación y evita la fragmentación o los conflictos sobre las prioridades de los litigios. Las alianzas exitosas también se basan en estrategias jurídicas conjuntas, mecanismos de financiación sostenidos y una planificación clara de los litigios para mantener el impulso a lo largo del tiempo.

PASO 7

Evaluación y anticipación de riesgos

El litigio estratégico puede requerir muchos recursos y presentar riesgos. Los profesionales del derecho pueden mitigarlo asegurándose de que su análisis es exhaustivo y está actualizado y trabajando con otros para preparar los diversos aspectos del caso. Además, la construcción de alianzas puede servir para repartir la carga y aumentar su fuerza para resistir desafíos y ataques. Los riesgos incluyen:

Riesgos	Mitigación
Costos financieros y de plazos	Los litigios pueden ser costosos y requerir mucho tiempo, así como recursos constantes y el compromiso de los equipos jurídicos. Los costos pueden incluir honorarios de profesionales del derecho externos, honorarios de personas expertas y campañas de comunicación complementarias. Los procedimientos judiciales pueden prolongarse durante meses o incluso años, lo que exige una financiación constante. La diversificación de las fuentes de financiación, como la búsqueda de subvenciones, la contratación de servicios pro bono y el aprovechamiento del <i>crowdfunding</i> , puede ayudar a garantizar la sostenibilidad financiera.
Riesgos jurídicos y procesales	Los litigios pueden enfrentarse a obstáculos jurídicos y procesales, como la parcialidad de las personas juzgadoras, los precedentes desfavorables y la rigurosidad de los requisitos probatorios y del agotamiento de otras instancias. Para prepararse para estas situaciones, los equipos jurídicos deben revisar los precedentes judiciales y planificar argumentos jurídicos sólidos que establezcan analogías con los precedentes positivos y distingan los precedentes negativos, reúnan evidencias exhaustivas, anticipen los argumentos en contra e identifiquen fueros alternativos en caso de ser necesario.
Riesgos políticos y sociales	Los litigios suelen generar resistencia por parte de la industria, los gobiernos e incluso segmentos del público. En estas situaciones, la reacción puede incluir una cobertura negativa en los medios de comunicación, acciones de represalia o interferencias políticas. Los equipos jurídicos pueden contrarrestar estos riesgos enmarcando el caso en narrativas de salud pública más amplias y creando coaliciones para demostrar un apoyo generalizado. También puede recurrirse a la comunicación estratégica para fomentar la conciencia y el apoyo públicos.
Riesgos reputacionales	Los oponentes pueden intentar desacreditar a las personas demandantes o a las organizaciones de defensa para socavar la legitimidad del caso. Es fundamental revisar en profundidad los puntos fuertes y débiles de las personas demandantes. Además, las estrategias de comunicación proactivas, incluidos los mensajes transparentes y las campañas de educación pública, son vitales para mantener la credibilidad y la confianza del público.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

Incertidumbre de los fallos

Incluso en casos con sólidos fundamentos jurídicos y probatorios, los tribunales pueden dictar resoluciones desfavorables que sienten precedentes jurídicos negativos y empoderen a los detractores. Si bien el litigio estratégico puede hacer avanzar los objetivos de salud pública incluso si el caso no prospera completa o parcialmente, las personas litigantes deben evaluar cuidadosamente las posibles repercusiones de un resultado negativo. Considere si perder el caso le permitiría avanzar en su objetivo de defensa o si una derrota debilitaría futuros esfuerzos de defensa, envalentonaría a las personas actoras de la industria o incluso proporcionaría una justificación a los gobiernos para reducir las protecciones sanitarias. A menudo vale la pena correr el riesgo de litigar, pero las personas litigantes deben evaluar las tendencias judiciales, anticiparse a los argumentos en contra y preparar estrategias alternativas, como vías legales alternativas, recursos o medidas complementarias que mantengan la presión pública y política sobre los responsables de la toma de decisiones.

Reacción del Gobierno y la industria

El litigio estratégico es una demostración de fuerza que a menudo hace que los oponentes retrocedan y actúen de acuerdo con los objetivos de salud pública. Sin embargo, esto puede provocar reacciones políticas y de la industria. Los gobiernos pueden reafirmar una posición regresiva o desacreditar a las personas defensoras de la salud pública, mientras que las personas actoras de la industria pueden emplear demandas de represalia, campañas de relaciones públicas o amenazas económicas para intimidar a las personas litigantes. Para anticiparse a estas respuestas es necesario crear alianzas, estrategias mediáticas y protecciones jurídicas para las personas demandantes y las personas defensoras implicadas en los litigios.

En última instancia, la gestión del riesgo de litigio no consiste en evitar una sentencia negativa, sino en planificar estratégicamente los contratiempos y los posibles resultados. Los litigios bien preparados incorporan planes de sostenibilidad financiera, estrategias jurídicas en múltiples jurisdicciones y medidas complementarias que refuerzan el caso más allá del tribunal. Si se reconocen estos riesgos en una fase temprana y se aplican enfoques estructurados para mitigarlos, los litigios pueden ser una herramienta resistente y eficaz para promover los objetivos de salud pública y la rendición de cuentas de la industria.

PASO 8

Comunicaciones y de defensa mediática

El litigio estratégico puede apoyarse y amplificarse mediante una comunicación eficaz y una cobertura mediática que fomenta la conciencia y el compromiso públicos. A su vez, los litigios y los precedentes jurídicos atraen e impulsan la atención de los medios de comunicación y pueden servir de base para futuras campañas de comunicación.

La [Guía de acciones para comunicaciones y de defensa mediática](#) del GHAI brinda orientación paso a paso para informar, planificar y ejecutar un plan de comunicación eficaz.

La defensa mediática fomenta la conciencia sobre las cuestiones subyacentes abordadas en los litigios. Los mensajes claros y accesibles pueden ayudar al público a comprender lo que está en juego en el caso y sus implicaciones más amplias para la salud pública. Por ejemplo, las campañas que ponen de relieve

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar



los peligros de las bebidas azucaradas pueden contextualizar un litigio que pretende imponer normas de etiquetado o impuestos sobre las bebidas azucaradas, generando apoyo público para su cumplimiento.

El encuadre es esencial para configurar la percepción pública de los litigios. Las personas expertas en comunicación deben elaborar relatos que hagan hincapié en el impacto humano del problema, como el daño causado a los niños por las prácticas publicitarias abusivas. Las historias convincentes pueden hacer que los argumentos jurídicos complejos sean comprensibles y lleguen a un público más amplio.

Establecer relaciones con periodistas y medios de comunicación garantiza una cobertura coherente y precisa del caso. Los profesionales del derecho deben dar conferencias de prensa claras y concisas, brindar reuniones informativas y ofrecer comentarios de personas expertas para mantener el control de la narración. La participación en plataformas de medios tradicionales y digitales amplía el alcance de la campaña.

El calendario de las campañas mediáticas debe coincidir con los principales hitos del proceso, como la presentación del caso, las audiencias o las sentencias. Los esfuerzos coordinados garantizan que la cobertura mediática mantenga el interés público y la presión sobre los responsables de la toma de decisiones a lo largo del litigio.

La defensa mediática también sirve de contrapeso a las narrativas de la industria. Los oponentes pueden presentar el litigio como un ataque a las libertades económicas o a la innovación. Las estrategias de comunicación proactivas pueden refutar estos argumentos y hacer hincapié en la necesidad y proporcionalidad de la acción legal para proteger la salud pública. Integrar la defensa mediática en una estrategia de litigio puede movilizar el apoyo público y garantizar que los resultados judiciales se traduzcan en beneficios en el mundo real. Al diseñar una campaña en los medios de comunicación deben evaluarse ciertos riesgos, como que la industria contraataque con demandas por difamación o infracción de marcas.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

ESTUDIO DE CASO: ESTADOS UNIDOS

Utilizar un enfoque múltiple para promover la accesibilidad y asequibilidad de alimentos saludables

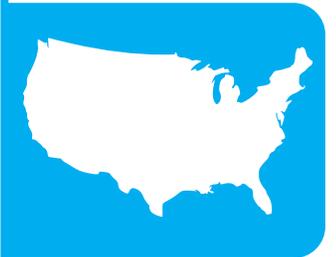
en Estados Unidos: El Centro para la Ciencia en el Interés Público (CSPI) desempeñó un papel clave en la oposición a la fusión Kroger-Albertsons, un acuerdo que amenazaba con consolidar la industria del mercado de comestibles de EE. UU. y llevar a precios más altos de los alimentos, la reducción de la elección de los consumidores, y el acceso limitado a los alimentos. La estrategia del CSPI se centró en la movilización pública, la creación de alianzas y la participación en la reglamentación. CSPI juntó más de 18 000 firmas en una petición para instar a la Comisión Federal de Comercio (FTC) a bloquear la fusión. Esta movilización popular demostró la preocupación generalizada del público por la fusión y reforzó los argumentos económicos y jurídicos presentados en las audiencias reguladoras.

Tras su petición, el CSPI envió una carta a la FTC en la que exponía su preocupación por el acceso a los alimentos, la equidad del mercado y el cierre de establecimientos como consecuencia de la fusión. Una reunión de seguimiento con funcionarios de la FTC reforzó la posición del CSPI ante los reguladores.

Más allá del compromiso regulador, el CSPI se unió a la alianza #StopTheMerger, que incluía sindicatos, grupos de defensa de los consumidores y organizaciones de justicia económica. Esta amplia alianza expandió la oposición por encima de los derechos de los consumidores, planteando preocupaciones sobre la pérdida de puestos de trabajo, la competencia de los proveedores y las prácticas corporativas anticompetitivas. El CSPI también planteó la fusión como una cuestión de salud pública y argumentó que la consolidación del sector de la alimentación limitaría el acceso a alimentos sanos, especialmente en las comunidades de bajos ingresos que ya luchan contra la asequibilidad y los desiertos alimentarios. Este argumento vinculaba la preocupación por la competencia con cuestiones de justicia social y económica, lo que hacía el caso más convincente para los reguladores y el público.

Un componente clave de la oposición de defensa de CSPI fueron sus argumentos relativos al plan de desinversión propuesto, en el que Kroger y Albertsons ofrecían vender 579 tiendas a C&S Wholesale Grocers (C&S), una empresa con escasa experiencia en la gestión de tiendas de comestibles al por menor, con el fin de mantener la competencia. CSPI —junto con otros grupos de defensa— presionó a la FTC para que argumentara que C&S carecía de la capacidad y la presencia en el mercado necesarias para gestionar estas tiendas con eficacia. El CSPI señaló los fracasos anteriores de las fusiones de supermercados, en particular la desinversión Albertsons-Safeway, que dio lugar a cierres generalizados de tiendas que perjudicaron desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos.

La defensa de CSPI contribuyó a una importante victoria legal cuando un juez federal bloqueó la fusión y dictaminó que dañaría la competencia, aumentaría los precios y tendría un impacto negativo en los trabajadores. Esta decisión servirá de guía para futuros desafíos legales a la consolidación empresarial. Este caso pone de relieve cómo las personas defensoras pueden utilizar las leyes en materia de competencia para alcanzar objetivos de salud pública.



Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

Asistencia jurídica técnica: Apoyo en litigios estratégicos

El GHAI desempeña un papel crucial en el apoyo a los litigios afirmativos y defensivos en materia de salud pública. Lo hace desarrollando estrategias de litigación, contrarrestando la oposición de la industria y ofreciendo oportunidades de refuerzo de la capacidad a personas litigantes de todo el mundo.

El GHAI lleva a cabo análisis jurídicos, prepara memorandos detallados y documentos de recursos, y se anticipa a los argumentos de los intereses contrarios. Esto incluye contrarrestar los alegatos de la industria relacionados con acuerdos comerciales, derechos constitucionales y preocupaciones económicas, y garantizar que los casos se construyan sobre argumentos basados en evidencias que den prioridad a consideraciones de salud pública y equidad. Además, el GHAI apoya estrategias afirmativas para hacer valer los derechos constitucionales e internacionales, así como las protecciones legales para los consumidores y para exigir rendición de cuentas a las personas actoras de la industria de los daños a la salud y de otro tipo.

En casos de gran repercusión, GHAI apoya los esfuerzos de litigación mediante la preparación de escritos *amicus* que contextualizan los casos dentro de los marcos nacionales y mundiales de salud pública, reforzando el impacto social más amplio de las decisiones judiciales. Además, las redes y asociaciones jurídicas del GHAI facilitan la colaboración entre personas expertas jurídicas y en salud pública, lo que permite que las estrategias de litigación incorporen la experiencia local al tiempo que se ajustan a las normas jurídicas internacionales.

A través de estos esfuerzos, el GHAI mejora la capacidad de los gobiernos y las OSC para proteger y hacer cumplir las políticas de salud pública, mitigar los riesgos jurídicos y aprovechar los litigios estratégicos como herramienta para la rendición de cuentas y el avance de las políticas.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

PASO 1

Determinar las demandas y los desafíos

PASO 2

Recopilar evidencias

PASO 3

Seleccionar las personas demandantes y demandadas

PASO 4

Elegir el fuero adecuado

PASO 5

Elegir el momento adecuado

PASO 6

Obtener apoyo

PASO 7

Evaluar los riesgos

PASO 8

Comunicación y medios

4

Evaluar

GUIA DE PASOS Litigios estratégicos

- ❑ **Definir objetivos claros de salud pública:** Determine si el litigio pretende obligar al gobierno a actuar, definir o reivindicar derechos constitucionales, defender una política, separar a la industria del gobierno o responsabilizar a las industrias perjudiciales para la salud.
- ❑ **Elegir las demandas adecuadas y prever los argumentos en contra:** Seleccione demandas que favorezcan su objetivo y prepare argumentos jurídicos que se ajusten al derecho constitucional e internacional.
- ❑ **Reunir evidencias sólidas y precedentes jurídicos:** Recopile estudios científicos, datos económicos y marcos jurídicos internacionales que respalden las demandas. Revise las sentencias judiciales nacionales e internacionales pertinentes para desarrollar y refuerce los argumentos jurídicos.
- ❑ **Seleccionar a las personas demandantes y demandadas adecuadas:** Asegúrese de que las personas demandantes tienen capacidad jurídica y representan el impacto en la salud pública. Elija estratégicamente a las personas **demandadas**. Considere si es más conveniente presentar el caso contra el Estado o contra personas actoras privadas, y evalúe si enfocarse en un único objetivo o en varios podría contribuir mejor a alcanzar su propósito.
- ❑ **Determinar el foro jurídico más eficaz:** Evalúe si debe presentar la demanda ante tribunales administrativos, nacionales o internacionales. Tenga en cuenta las tendencias judiciales, las normas procesales y la probabilidad de una sentencia favorable.
- ❑ **Planificar el litigio para obtener el máximo impacto:** Haga coincidir la acción legal con los debates legislativos, las campañas de concienciación pública o los plazos reglamentarios.
- ❑ **Anticipar los riesgos:** Evalúe la solidez de su caso y prepárese para contratiempos legales y reacciones políticas. Asegúrese una financiación sostenida y desarrolle planes de contingencia y vías y argumentos jurídicos alternativos.
- ❑ **Construir alianzas y buscar apoyo:** Comprometa a organizaciones de la sociedad civil, personas expertas jurídicas y profesionales de la salud pública. Coordine los litigios con estrategias complementarias para mantener el impulso más allá de los tribunales.
- ❑ **Aprovechar los medios de comunicación para involucrar a la ciudadanía:** Utilice la comunicación estratégica para sensibilizar y formar a la opinión pública, contrarrestar las narrativas de la industria y destacar el impacto humano de los desafíos legales.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

4

Evaluar

Capítulo 4

Evaluar (y reevaluar)

Esta guía ayuda a las personas defensoras jurídicas a trazar el rumbo de intervenciones jurídicas eficaces para hacer avanzar la salud pública analizando el contexto jurídico y político para desarrollar las estrategias jurídicas más factibles y eficaces de redacción jurídica y litigio estratégico. Sin embargo, es importante señalar que la defensa jurídica eficaz no es lineal por naturaleza. Requiere una evaluación periódica para calibrar si la evolución del contexto jurídico o político exige un análisis adicional para ajustar el cálculo de viabilidad y eficacia de las distintas acciones legales. Además, las estrategias jurídicas no son «una y ya está», sino que se apoyan y se requieren mutuamente, así como estrategias complementarias como las comunicaciones, para obtener el máximo impacto en la salud pública.

Por ejemplo, los litigios pueden iniciar un cambio político al crear las condiciones para la sanción de una nueva normativa. Este éxito debe ir seguido de una redacción jurídica eficaz de esa política y de esfuerzos para supervisar su aplicación y defenderla frente a posibles impugnaciones (lo que da lugar a más litigios). La defensa jurídica es un ciclo de acción, reflexión y adaptación, y esta guía proporciona las herramientas necesarias para navegar por este ciclo con eficacia.

Hay que evaluar y reevaluar constantemente el propio análisis y la elección de las acciones para seguir avanzando en salud pública y evitar retrocesos. Las elecciones y el nombramiento de nuevos funcionarios, los ajustes en los presupuestos y los programas y prioridades gubernamentales, y la promulgación de nuevas leyes alteran el contexto del país y, por tanto, la base de cualquier estrategia. Lo que antes parecía más factible y eficaz puede no serlo tanto ahora, o a medida que se van cumpliendo hitos, hay que plantearse cómo alcanzar el siguiente. Es importante reconocer los logros sin permitir que detengan el progreso. Retome el proceso de análisis y establezca los próximos pasos.

Por último, una defensa jurídica eficaz requiere la intersección de las principales estrategias jurídicas analizadas en esta guía con medidas complementarias que amplifiquen sus efectos y sostengan el movimiento (incluidos las personas actoras del movimiento). Tenga en cuenta lo siguiente:

- Normas de procedimiento y gobernanza que frenen la interferencia de la industria y garanticen la transparencia del gobierno y la participación de la sociedad civil en el proceso político.
- Ampliación de la colaboración intersectorial para proporcionar apoyo adicional.
- Iniciativas de refuerzo de capacidades que formen a las personas defensoras legales.
- Creación de fondos específicos para litigios que respalden la acción legal continuada.

Introducción

1

Analizar

2

Redactar

3

Litigar

4

Evaluar

ESTUDIO DE CASO: ARGENTINA

Perfeccionando el giro estratégico - El recorrido de la Ley de Promoción de la Alimentación

Saludable de Argentina (2015-2024): La defensa jurídica eficaz no se detiene con la aprobación de una ley o la victoria en los tribunales, sino que requiere un seguimiento, una defensa y una adaptación continuos. La evolución de la ley argentina de alimentación saludable es un buen ejemplo de cómo se lleva esto a la práctica.

A través de un proceso abierto y participativo, el Congreso aprobó en noviembre de 2021 una ley integral de etiquetado de alimentos con las mejores prácticas. Personas expertas y defensoras — incluidos FIC Argentina, Fundeps, SANAR y FAGRAN— se pronunciaron a favor del proyecto de ley. La ley ordenó etiquetas de advertencia notorias en alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcar, sodio, grasas y calorías. También exigía la declaración del contenido de azúcar, regulaba las declaraciones de propiedades saludables y la publicidad de alimentos, e imponía normas para los entornos alimentarios escolares. La ley se basaba en el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud y también obligaba a declarar los edulcorantes y la cafeína. En febrero de 2022, el Ministerio de Salud y la ANMAT, la agencia nacional de salud, emitieron reglamentaciones de implementación con aportes de las OSC.

Sin embargo, estos avances se vieron amenazados tras la llegada al poder del Presidente Javier Milei a finales de 2023, con una plataforma de desregulación. Las autoridades sanitarias perdieron influencia y las OSC quedaron excluidas en gran medida de los debates políticos. Cuando surgieron rumores de cambios en la política alimentaria, las personas defensoras presentaron solicitudes formales de información, la mayoría de las cuales quedaron sin respuesta. A finales de 2024, el gobierno promulgó una nueva normativa que debilitaba significativamente los requisitos de etiquetado y publicidad. Ante la falta de vías de participación pública y el escaso apoyo político a políticas alimentarias sólidas, las personas defensoras recurrieron a la vía judicial. FIC Argentina y FAGRAN presentaron recursos administrativos, argumentando que los cambios representaban una regresión y violaban los derechos constitucionales a la salud y la alimentación.

Estos casos están en curso, pero Argentina ilustra la necesidad de un compromiso jurídico sostenido, una evaluación constante y la capacidad de cambiar de rumbo cuando cambia el entorno político para garantizar y proteger el impacto en la salud pública.

El equipo jurídico del GHAI, que trabaja en diversas campañas y programas, proporciona asistencia técnica especializada, recursos y fortalecimiento de la capacidad a profesionales del derecho, personas defensora, gobiernos y profesionales de la salud pública que trabajan para aprobar, aplicar, defender y hacer cumplir en sus países políticas basadas en evidencias y para exigir responsabilidades a las industrias perjudiciales para la salud por los daños que causan. Nuestro apoyo jurídico también incluye la participación en fueros jurídicos internacionales para promover comunidades más sanas en todo el mundo.

Obtenga más información aquí: www.advocacyincubator.org/about/our-expertise/legal-litigation-strategy.

Copyright © 2025 Global Health Advocacy Incubator (GHAI), una iniciativa de la Campaign for Tobacco-Free Kids. Este documento puede publicarse, difundirse, compartirse y usarse solo con plena atribución a GHAI. El documento no puede modificarse, adaptarse ni alterarse de manera alguna sin el consentimiento de GHAI.